

JULIO 13 de 1922

9.a REUNIÓN - 3.a SESIÓN ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL CORONEL PEREYRA ROZAS

DIPUTADOS PRESENTES: Acosta Abel, Albarracín Francisco L., Alemán Eugenio Alfonso Felipe S., Amuchástegui José A., Anastasi Leonidas, Andreis Fernando De, Antille Armando G., Aragón José M., Arámburu Juan B., Aráoz José Luis, Aráoz Miguel A., Arnedo Rodolfo, Astrada Manuel J., Barbich M. José, Bard Leopoldo, Barrera Nicholson A., Bas Arturo M., Bauch Daniel, Beguiristain Manuel B., Bordabehere Enzo, Botinelli Juan B., Bréard Eugenio E., Bunge Augusto, Cafferata Juan F., Canale Pedro, Capurro Juan José, Carbó Romeo, Cardarelli Emilio, Carol Absalón, Carosini Alberto H., Catalán Emilio, Ceballos Mariano P., Ceballos Rodolfo F., Claros Ernesto, Correa José A., Cevalán Santiago E., Cristobo Gumersindo L., Cuciati Miguel, Davel Ricardo J., Dávila San Román F., Diekmann Adolfo, Diekmann Enrique, Duffy Eduardo N., Dussaut Rubén, Emparanza Francisco, Errecart Juan A., Escobar Adrián C., Pereyra Andrés (hijo), Frugoni Juan José, Gallardo Manuel, Gancedo Alejandro (hijo), García Tuñón Eduardo, Gil Matías, González José Antonio, González Calderón Juan A., González Iramahú Héctor, González Zimmermann A., Goyri Emilio, Grau José M., Gschwind Otto C., Güerec Luis, Guido Mario M., Justo Juan B., Landaburu Laureano, López Héctor S., López Anaut Pedro, Loustau-Bidaut Pedro, Lozano Antonio, Lloveras Ventura, Maidana Julián, Martínez Benigno, Martínez José Heriberto, Martínez José María, Massoni José S., Meyer Oscar, Míguez Edgar-do J., Molinas Luciano F., Mora y Araujo Manuel, Moral Ernesto M. del, Moreno Pedro An-tonio, Moreno Rodolfo (hijo), Muzio Agustín S., O'Farrell Juan A., Olaso Ezequiel S., Olmos José T., O'Reilly Guillermo R., Ortiz Roberto M., Otamendi José A., Parodi Silvio E., Parry Ro-berto, Patrón Costas Néstor, Paz Alberto J., Pereyra Rozas Ricardo, Pinto Manuel (hijo), Pintos Angel, Pradère Carlos M., Quinteros Eduardo F., Quiroga Marcial V., Quirós Herminio J., Rodeyro José León, Rodríguez Jorge Raúl, Ruiz Manuel S., Rubilar Francisco, Sacccone Romeo David, Sánchez Elia Angel, Sánchez Sorondo Matías G., Santa María Arturo, Santamarina An-tonio, Saravia Pablo, Siri Obdulio F., Spinetto Alfredo L., Taboada Diógenes, Tamborini José P., Texler José M., Toledo Antonio B., Tomaso Antonio de, Tomaszowski Eduardo M., Trucco Rómulo B., Uriburu Francisco, Verduga José María, Vergara Valentín, Walther Adolfo; PRE-SENTES DESPUÉS DE HORA: Celsia Ernesto H., Fernández Daniel; AUSENTES CON LI-CENCIA: Alvarado Manuel R., Costanti Gerardo, Díaz de Vivar Ramón, Echagüe Alfredo, Francio-ni Isaac, Gatica Teófilo I., Vega Abraham de la; AUSENTES CON AVISO: Barceló Alberto, Carbone Luis A., Cárcano Ramón J., Garayalde José M., Rocca Manuel, Solari Felipe C., Soler y Urquiza Justo J.; AUSENTES SIN AVISO: Alvarez Hayes Justo, Amado Isaías R., Bary Alberto de, Correa Francisco E., Demaría Mariano, Miflones Alejandro, Núñez Pedro R., Oyhanarte Raúl F., Peña Solano, Repetto Nicolás, Rodríguez Calixto A., Torre Lisandro de la.

SUMARIO

- 1.—Se da por aprobada el acta de la se-sión anterior.
- 2.—El señor diputado Frugoni reproduce su proyecto de ley sobre creación del con-servatorio nacional de música. El señor diputado Quinteros reproduce los signien-tes proyectos: 1.º, construcción de un puente sobre el río Cosquín; 2.º, canal de navegación del río Bermejo hasta el río Paraná.
- 3.—Pedido de pronto despacho del señor diputado Trucco para el proyecto de ley sobre saneamiento y desagüe de las zonas oeste, sur y norte de la ciudad de Buenos Aires.
- 4.—El señor diputado Rodeyro reproduce los siguientes proyectos de ley: 1.º, im-puesto a las operaciones del mercado a término; 2.º, represión de la falsifica-ción de productos alimenticios y medi-cinales; 3.º, prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas; 4.º, propiedad literaria y artística; 5.º, te-rreno para el colegio nacional Juan Mar-tín de Pueyrredón; 6.º, ejercicio de la procuración.
- 5.—Asuntos entrados.
 - I.—Peticiones oficiales, despachos de comisión, comisiones constituidas y asuntos caducados.
 - II.—Peticiones particulares.
 - III.—Proyecto de ley de los señores diputados Ortiz y Bas sobre crea-

ción del Banco Rural de la República.

IV.—Proyecto de ley de los mismos señores diputados sobre construcción de depósitos de cereales y elevadores de granos.

V.—Proyecto de ley de los mismos señores diputados sobre construcción de mataderos y frigoríficos regionales.

VI.—Proyecto de ley de los mismos señores diputados sobre impuesto adicional re contribución territorial.

VII.—Proyecto de ley de los señores diputados Arámburu y Olmos sobre instalación del arsenal principal de guerra de la nación.

VIII.—Proyecto de ley del señor diputado González, reproducido, sobre ejercicio de la profesión de escribano.

IX.—Proyecto de ley de los señores diputados González y Mora y Araujo, reproducido, sobre creación de cámaras federales en las ciudades de Corrientes, Mendoza y Bahía Blanca.

X.—Proyecto de ley del señor diputado Taboada por el que se manda practicar estudios para el levantamiento planialtimétrico y catastral de una zona en la margen derecha del río Quinto.

XI.—Proyecto de ley del señor diputado Bard sobre creación de una subsecretaría de salud pública y de asistencia social.

XII.—Proyecto de ley del señor diputado Parry sobre creación de una escuela de artes y oficios en Mercedes (Buenos Aires).

6.—Se resuelve insertar en el Diario de Sesiones una nota de la Sociedad Argentina de Autores relativa a la propiedad literaria y artística.

7.—Licencia para faltar a sesiones concedida al señor diputado Costanti.

8.—Nuevos asuntos entrados:

I.—Mensaje y proyecto de ley del poder ejecutivo por el que se eleva al rango de embajada la representación de la república en el Brasil.

II.—Mensaje y proyecto de ley del poder ejecutivo por el que se eleva al rango de embajada la representación de la república en Chile.

9.—Proyecto de resolución de varios señores diputados, fundado por el señor Sánchez Elia, sobre nombramiento de una comisión que represente a la honorable cámara en los actos de homenaje que se tributarán próximamente a la memoria del doctor Rufino de Elizalde. Consideración y aprobación sobre tablas.

10.—Continúa la consideración del despacho de la comisión de legislación del trabajo en el proyecto de ley reproducido por el señor diputado López Anaut por el que se reglamenta el trabajo de las mujeres y menores. Aprobación en general. Rechazo de una moción de aplazamiento para tratarlo en particular. Prosigue la discusión en particular.

—En Buenos Aires, a 13 de julio de 1922, siendo la hora 15 y 40, ocupan sus bancas en el recinto los señores diputados en quórum legal.

1

ACTA

Sr. Presidente (Percyra Rozas). — Queda abierta la sesión con asistencia de 86 señores diputados.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

Sr. Davel. — Hago indicación para que se suprima la lectura del acta y se dé por aprobada.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Percyra Rozas). — Habiendo asentimiento, se dará por aprobada.

2

PROYECTOS REPRODUCIDOS

I

Sr. Frugoni. — Pido la palabra.

Para reproducir, señor presidente, el proyecto sobre creación del conserva-

doctor Elizalde, se adhiera al homenaje.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — El señor diputado ¿desea que se trate sobre tablas?

Sr. Sánchez Elía. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Está en consideración.

—Sin observación, se vota la moción y es aprobada.

—Se lee nuevamente.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — En discusión en general.

—Sin observación se vota y aprueba en general y en particular.

Sr. Sánchez Elía. — Pido la palabra.

Hago indicación de que la honorable cámara delegue en la presidencia la designación de esa comisión.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Habiendo asentimiento general, la presidencia designará a los señores diputados que formarán la comisión.

10

TRABAJO DE LAS MUJERES Y MENORES

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Continúa la consideración en general del proyecto de ley que reglamenta el trabajo de mujeres y menores.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

La comisión anterior de legislación del trabajo había realizado una obra fecunda, y ha sido precisamente empleando sus materiales como la nueva comisión presenta a la consideración de la honorable cámara el despacho a que se refiere la orden del día número dos.

El título del proyecto de ley, para explicar su contenido, sería "ley sobre trabajo de mujeres y de menores".

El contenido del proyecto, según puede observarse recorriendo los diversos

artículos, toca los siguientes puntos: primero, edad de admisión de los menores; segundo, trabajo nocturno de los adolescentes; tercero, trabajo nocturno de las mujeres obreras; cuarto, protección de las mujeres embarazadas.

Voy a ir explicando someramente los distintos puntos, a fin tan sólo de ilustrar la discusión en particular.

En lo que se refiere a la edad de admisión de los menores, el despacho que someto a la consideración de la honorable cámara fija los siguientes límites de edad: catorce años para los trabajos industriales y para los trabajos comerciales; doce años para el servicio doméstico y para los trabajos rurales.

Para proponer este mínimo de edad la comisión ha tenido en cuenta que la ley 5291 no responde ya al desarrollo de la legislación positiva. La ley 5291 fijaba como límite diez años. En efecto, su artículo 1.º, del capítulo 1.º, en las disposiciones de derecho civil expresaba: El trabajo de los menores de diez años no puede ser objeto de contrato. La comisión ha creído que este límite debía elevarse a doce años, y aun así explica en el segundo apartado del artículo 1.º cómo no podrá ocuparse a mayores de esa edad que, comprendidos en edad escolar, no hayan completado su instrucción obligatoria.

Con posterioridad a la ley 5291, los diversos proyectos presentados por los señores legisladores en esta cámara, se referían a un mínimo de edad más alto que el fijado por la ley 5291. El mínimo que se determina para los trabajos industriales tiene su antecedente inmediato en la convención de Washington, que lo ha fijado en la edad de catorce años. Esta convención no se ha referido, en cambio, al trabajo de los establecimientos mercantiles, punto que considera la comisión que debe ser también legislativo, porque las mismas razones que determinan la reglamentación del trabajo de los menores en una empresa industrial valen en el caso de explotación mercantiles. El proyecto de código del trabajo del poder ejecutivo fija doce años para los esta-

blecimientos mercantiles y catorce años para los establecimientos industriales.

Dije que el segundo conjunto de disposiciones se refería al trabajo nocturno de los adolescentes. El proyecto dispone, en su artículo 5.º, que no se podrá ocupar a menores de 18 años en trabajos nocturnos, entendiéndose por tal el comprendido entre las horas 20 hasta las 7 del día siguiente. La ley 5291 se limitaba a ordenar, en sus disposiciones de derecho civil, que no se ocupara a menores de 16 años en trabajos que se ejecutan habitualmente en las horas de la noche, y, en sus otras disposiciones contenía la prohibición de emplear mujeres o menores de 16 años en trabajos nocturnos, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Hay actualmente un acuerdo general sobre la fijación de un límite de edad más alto para el trabajo nocturno de los adolescentes como para el trabajo nocturno de las mujeres. Antes de las convenciones de Washington, ya las convenciones de Berna de 1905, 1906 y 1913, limitaban las dos primeras la admisión de los adolescentes a los trabajos nocturnos, fijando la edad de 16 años: mejor dicho, las dos primeras prohibían el trabajo nocturno de las mujeres obreras, y la última prohibía el trabajo nocturno de los adolescentes desde 16 años. El término "noche", a que se refiere nuestro proyecto, es tal vez el más amplio que consagran actualmente las legislaciones positivas. Por el texto de la convención de Washington, que reproduce en esta parte el articulado de las convenciones de Berna, el término "noche" comprende un período de 11 horas consecutivas que deben transcurrir entre las 22 y las 7 del día siguiente. Nuestro proyecto amplía. El término "noche" comprende las horas transcurridas entre las 20 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente en verano, y las 7 de la mañana en invierno.

En lo que se refiere al trabajo nocturno de las mujeres obreras, la comisión ha considerado que no debía hacer más excepciones que las que se refieren a los servicios de enfermeros, al

servicio doméstico, y a los de empresas de espectáculos públicos.

En realidad no hay actualmente discusión sobre la necesidad de reglamentar el trabajo nocturno tanto de los adolescentes como de las mujeres obreras. Es un punto ya resuelto por la doctrina y por todas las legislaciones, casi sin excepción.

Más difícil tal vez de legislar es lo que llamaría el contenido del cuarto grupo de disposiciones dentro de la ley, es decir, aquel que se refiere a la protección de la mujer embarazada.

La comisión de legislación del trabajo ha creído conveniente mejorar el texto de la convención de Washington, y si se tiene noticia de cómo determinados países han resistido la adopción de la convención de Washington relativa a la protección de la mujer embarazada, se comprenderá cómo el despacho puede considerarse como una de las proposiciones más adelantadas en esta materia.

En efecto: la convención de Washington establece, en lo que se refiere al reposo de la mujer obrera embarazada, un período de seis semanas anterior al alumbramiento y un período de seis semanas posterior a él, con una diferencia: que el período anterior al alumbramiento es facultativo para la mujer, en tanto que el posterior es obligatorio.

La comisión ha creído conveniente, después de oír el parecer de cuatro de sus miembros, médicos distinguidos, que las mismas razones que militaban para el período de reposo posterior al alumbramiento debían militar también para el período anterior, y en ese sentido se establece un período prohibitivo tanto anterior como posterior, según se observará después en la discusión en particular, en la cual no tendré inconveniente alguno en ampliar esta exposición.

Ha creído la comisión que debía iniciar su labor con lo que llamaremos la materia más fácil de la legislación obrera, acerca de la cual no existe discrepancia de ninguna naturaleza, por lo menos en principio, salvo los deta-

lles apuntados en el curso de esta exposición.

Estas son las breves razones que han movido a la comisión a aconsejar la sanción de este despacho. Como el contenido del proyecto es un poco amplio, tal vez será más conveniente para los señores diputados, y aun para la comisión, que otras informaciones se proporcionen cuando se produzca la votación en particular.

Nada más.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Una circunstancia de orden fortuito — la grave enfermedad de un miembro de mi familia — ha hecho que no lleve este despacho de la comisión mi firma, a pesar de ser el diputado que habla autor del proyecto que lleva la fecha más antigua entre los que han servido de base al despacho anterior, que el actual reproduce con modificaciones de detalle.

Por no haber tomado parte en las reuniones de la comisión, las observaciones que debía hacer al nuevo despacho las he formulado a sus miembros particularmente, antes de la sesión de hoy, y las aceptadas han sido presentadas en secretaría, por lo que ruego al señor secretario se sirva dar lectura de ellas el ponerse a votación los respectivos artículos.

No voy, pues, a hablar como miembro informante en disidencia, sino como autor de un proyecto que, aunque ha caducado de acuerdo con las reglas parlamentarias y que por razones de orden material no había reproducido, puedo considerar subsistente, porque esa reproducción hubiera sido cuestión de pocas palabras.

En general, señores diputados, las leyes del trabajo, por no tratarse de asuntos de actualidad política candente, despiertan poco interés en el seno de esta cámara. Es casi doloroso constatarlo, y compruebo ahora como una grata observación, que pocas veces se han discutido leyes del trabajo con una concurrencia tan numerosa de diputados.

Vale la pena esta concurrencia, porque aunque a primera vista la reglamentación del trabajo de las mujeres

y niños es un detalle de la legislación social, ella afronta una cuestión de primera importancia, una cuestión que compromete no sólo intereses económicos vitales, sino hasta el porvenir biológico de la especie, y esto es porque la tendencia de la industria moderna ha ido en las últimas décadas a ocupar en proporción creciente el trabajo de las mujeres y los niños.

Pero hay esto de particular en nuestro país. A pesar de que no somos un país de desarrollo capitalista muy vasto, que la gran industria, que es la característica ocupadora de mujeres y niños, está relativamente poco desarrollada; a pesar de ello es la Argentina el país en que una mayor proporción de mujeres se ve en la necesidad de trabajar en ocupaciones remuneradas para su sustento o contribuir al sustento de su familia. Tiene, pues, peculiar razón de ser entre nosotros la reglamentación del trabajo de mujeres y niños.

Para que no quede en el ánimo de los que tienen la deferencia de escucharme la duda sobre esta afirmación, voy a permitirme citar unas cuantas cifras que la demuestran en forma concluyente.

El censo del año 1914 registra entre las personas ocupadas un número de mujeres tan considerable que llama ya la atención a primera vista. Registra 494.571 ocupadas en las diferentes profesiones, las cuales se descomponen en esta forma: entre los 468.000 argentinos de ambos sexos aparecen 183.000 varones en números redondos, y la cifra de mujeres es de 285.000, es decir: muchas más mujeres nativas trabajan en ocupaciones remuneradas que hombres. La diferencia es tan enorme, 100.000 en más, que cuesta creer que haya un error del censo; y analizando las cifras se ve que ese número de mujeres nativas que trabajan se refiere a las que ejercen algunas de esas ocupaciones derivadas de las tareas domésticas de la mujer, como lavanderas, planchadoras, etc.

Entre los extranjeros la proporción es la siguiente: para 305.000 varones, 68.000 mujeres únicamente. Ahora, es-

tas cifras, para los argentinos que creen necesario ocuparse con preferencia en la población criolla, tiene un significado elocuente y es el siguiente: entre los nativos, por cada tres nativas mujeres de más de quince años, trabaja una por dinero, mientras que entre las inmigradas sólo trabaja una mujer de cada cuatro. Hay pues un 33 por ciento de las mujeres nativas que tienen que ganarse la vida aunque sean casadas, proporción que se reduce al 35 por ciento para las inmigradas. Pero estas últimas están en las edades más activas, de 20 a 45 años, mientras que entre las nativas las hay de 15 a 80 años. Quiere decir que la diferencia real acerca al doble, si se tienen en cuenta las diferentes edades.

La experiencia dice que la inmensa mayoría de las mujeres obligadas a trabajar son solteras o viudas. Entre nosotros, sin embargo, la proporción de casadas que deben trabajar fuera de sus casas tiene que ser considerable, a juzgar por esta comprobación que he hecho y que menciono en un librito mío: "La inferioridad económica de los argentinos nativos". Las nativas ocupadas son 57 por cada 100 solteras y viudas; mientras que las inmigradas solteras y viudas son 73 por cada 100. Esto hace presumir, por lo tanto, que hay una considerable proporción mayor de casadas nativas que ganan un salario, dado que su proporción relativa entre las ocupadas es mayor.

Se trata, pues, señores diputados, de afrontar entre nosotros con la legislación, siquiera sea indirecta, la situación que la inferioridad económica del argentino nativo crea a la mujer nativa, obligándola a concurrir a fábricas o talleres o a trabajar en su casa bajo la forma del trabajo a domicilio, estableciendo condiciones que les permitan realizar ese trabajo en condiciones higiénicas compatibles con la salud y con la función capital de la mujer, que es formar un hogar y educar a sus hijos sanos y como miembros de una colectividad civil.

El trabajo de los niños no tiene entre nosotros esta enorme importancia relativa del trabajo de la mujer, si son

exactos los datos suministrados por los industriales a las autoridades del censo.

Según el censo de las industrias y el comercio, trabajan en las industrias, sobre 410 mil personas asalariadas, sólo 18.000 menores de 16 años, y en el comercio, sobre 319.000 personas asalariadas, trabajan tan sólo 20.000 menores. Pero todo el que recorre el país recibe la impresión de que estas cifras son excesivamente moderadas, de que hay un mayor número de menores, ocupados en las industrias. Tal vez se deba ello a que son sobre todo la capital federal y la provincia de Buenos Aires las que ocupan a menores en las industrias y en el comercio. Pero hay que tener en cuenta también, señores diputados, la enorme proporción de niños de menos de 14 años, muchas veces de 10 años, que toman parte en las industrias rurales y en los trabajos rurales en general. Esos niños son substraídos a la escuela desde el primer grado y a más tardar desde el segundo.

Demuestran nuestras estadísticas escolares, si se las analiza, cuidadosamente, que sólo una pequeña proporción de nuestros niños, a lo sumo la cuarta parte, llega a pasar del cuarto grado. La inmensa mayoría de los niños es substraída a la escuela por el trabajo asalariado o rural.

Es, pues, ante todo, la reglamentación del trabajo de los niños entre nosotros un problema de educación popular. No se hará efectiva la obligación de la enseñanza, mientras se pueda impunemente explotar el trabajo del niño.

Es también un problema biológico mucho más importante que el referente al trabajo de la mujer.

No voy a cansar a la cámara con citas que se pueden recoger a montones en cualquier biblioteca, que demuestran los desastrosos efectos del trabajo en una edad prematura, desastrosos efectos sobre el desarrollo, sobre la conformación física y hasta sobre el desarrollo de las aptitudes mentales. Citaré a este respecto dos hechos tan solo. El primero, en una región de Prusia, en donde es tradicional el trabajo del niño, la pro-

porción de los exceptuados del servicio militar por absoluta insuficiencia de desarrollo, llegaba a 75 por ciento; y este otro referente a Inglaterra: los educacionistas han reclamado la supresión de la media jornada en que pueden trabajar los niños de 12 a 14 años, especialmente en las filaturas, pero también en muchas otras fábricas, que concurren normalmente a la escuela durante las otras cuatro horas que les quedan libres en el día. Esos niños ocupados por el trabajo de cuatro horas no podían trabajar en clase los días que habían tenido trabajo por la mañana. El resultado final era que perdían todo interés por la enseñanza, se desalentaban, y año tras año quedaban esos niños *half-time* — como se dice allí — detenidos en su progreso escolar. Los médicos examinadores de escuelas han comprobado que los niños que trabajan media jornada son de menor estatura, de menor peso y de mucho menor desarrollo mental que los niños de igual edad que no trabajan en la industria.

Entre nosotros, señor presidente, se ha explotado el trabajo infantil en las condiciones más inicuas, antes de la sanción de la ley cuya reforma actualmente se discute. Y estoy cierto que si esa explotación se ha atenuado en la actualidad, no se debe a esa ley, porque prácticamente no se la ha aplicado, sino únicamente al progreso económico del país, a los más altos salarios que han conquistado los trabajadores, al perfeccionamiento de la técnica en las industrias en que más se ocupaba el trabajo infantil y en las cuales, ahora, explotarlo no resulta tan lucrativo.

Pero aun hoy — estoy cierto — sigue explotándose el trabajo de los niños de edad inferior a catorce años, y no sólo en la jornada diurna sino en la jornada nocturna, en forma que es una vergüenza para el país y que debe desaparecer cuanto antes.

No es sólo la prohibición del trabajo por debajo de cierto límite de edad, no es sólo la reglamentación higiénica general y de la jornada de trabajo de la mujer lo que es indispensable afrontar en una ley de esta clase. La experiencia

universal demuestra que el organismo femenino, por susceptibilidades propias del sexo, no soporta ciertas formas de fatiga lo mismo que el organismo masculino; que los venenos industriales tienen por lo general, en la mujer, consecuencia mucho más grave que en el hombre.

Por otra parte, un cuerpo legislativo formado por hombres debe encarar este asunto en cierto sentido desde el punto de vista del privilegio tradicional del sexo fuerte, esto es, con un criterio de protección. Debe considerar que la mujer, por el hecho de ser en nuestro país la parte débil, la parte despojada por la ley de los derechos más fundamentales como son los derechos del ciudadano y los derechos civiles, la que a consecuencia de esa situación subordinada que le ha creado la ley tiene menor capacidad para defender sus condiciones de vida, debe ser protegida por los hombres que han adquirido una conciencia social del papel que ella desempeña en la vida civilizada, y que al mismo tiempo saben que no puede soportar esa condición de inferioridad en que la tradición la ha colocado.

Debe extenderse entonces la protección de la mujer a todas las industrias insalubres, en consideraciones a ella misma y a su importantísimo papel social de madre; debe eliminársela de todos los trabajos insalubres, y también de las tareas peligrosas, porque tenemos la experiencia de que, sea debido a su mayor debilidad muscular, o a que tiene menor capacidad de concentración que el hombre, la mujer está más expuesta a los accidentes del trabajo, a igualdad de peligro, que el hombre. Por eso, la legislación universal, combinando ese criterio de protección que han aplicado los cuerpos legislativos masculinos con la experiencia, prohíbe la ocupación de la mujer en tareas peligrosas e insalubres.

La legislación que nos rige ha encarado todos estos puntos que he expuesto en breve síntesis, pero lo ha hecho en forma tan deficiente que puede decirse que no existe, que no ha desempeñado más misión que la de permitir a delegados

del gobierno argentino en los diferentes congresos sociales o de legislación del trabajo, mencionar, entre la lista de leyes que podrían invocar, una que se llama de protección del trabajo de la mujer y del niño, pero que no lo es ni de la una ni del otro. Considero oportuno mencionar este antecedente para que pueda verificarse, en las ulterioridades que tenga el proyecto que, estoy cierto, ha de sancionar esta cámara, — si el progreso determinado por la participación del pueblo en virtud del sufragio universal secreto determina a su vez un progreso en nuestra legislación social.

La ley que la cámara se prepara a reemplazar tuvo su punto de partida en el año 1906, en un proyecto del entonces diputado socialista doctor Alfredo L. Palacios. Ese proyecto fué despachado favorablemente, con la unanimidad de los miembros de la comisión; pero ocurrió de particular, que al empezarse a discutir, cada uno de los firmantes, de los padres del proyecto, lo abandonó como si hubiera existido el "torno libre" para los despachos de comisión. Comenzaron los firmantes, excepto el autor del proyecto, a hacerle fuego, a decir que lo habían firmado con reservas, que se reservaban presentar observaciones en la discusión en particular. En consecuencia de ello, la cámara resolvió que el proyecto volviera a comisión. La comisión consultó al entonces presidente del departamento del trabajo, doctor Matienzo, quien proyectó, con algunos retazos tomados del proyecto socialista y algunas disposiciones jurídicas abstractas, lo que es la ley actual.

El criterio jurídico abstracto que ha predominado en la redacción de la actual ley y la consideración, que también ha primado, de establecer condiciones especialmente favorables a los capitalistas del interior para explotar el trabajo infantil, ha traído por resultado ese triste engendro de una ley con dos criterios: uno para la capital federal y otro para el resto de la república. Prohíbe la ocupación de menores de doce años en la capital y auto-

riza su ocupación, a partir de los diez años, en el resto del país.

Ese criterio estrecho ha determinado también que la ley no tuviera disposiciones de aplicación que permitan hacerla efectiva automáticamente, sin necesidad de la intervención de la inspección del trabajo; y ha determinado también que la propia inspección del trabajo se vea dificultada en la tarea de hacer efectivas las penalidades, cuando llega el caso, por falta de disposiciones claras al respecto.

Basado en esa experiencia, redacté el proyecto que ha sido uno de los que han servido de punto de partida al despacho que ahora va a discutir la cámara. Me voy a permitir indicar cuáles son esos puntos especiales, para que los señores diputados puedan apreciar, al tratarse el proyecto en particular, la razón de ser de disposiciones que tal vez puedan parecer de detalle excesivo.

Comprendo que en cierto modo invado el terreno del miembro informante de la comisión; pero no es como tal que hablo, sino como autor de un proyecto que revive en parte en el actual despacho de la comisión, y en el deseo de que no vayan a ser rechazadas disposiciones capitales.

Ante todo, se establecen limitaciones positivas en la edad de ocupación y en la jornada. La comisión no ha aceptado del proyecto socialista la limitación de la jornada de trabajo a ocho horas para mujeres cuatro o seis horas para los menores, porque cuando se discutió ese proyecto en el seno de la comisión, el año pasado, la comisión había ya formulado su despacho de jornada general de ocho horas y había en la mayoría de sus miembros la casi certidumbre de que la cámara sancionaría ese proyecto sin discusión y que el senado haría otro tanto. Pero hoy, que esa ley de ocho horas sancionada por la cámara de diputados, ha quedado encarpetada en un senado que no se reúne para tratar los asuntos más elementales, debemos abrigar serias dudas sobre la probabilidad de que la ley de ocho horas sea sancionada definitivamente este año.

Por esa razón, lamento que no exista una disposición que limite la jornada de las mujeres y menores, que siempre será útil, aun cuando más tarde se estableciera con criterio general para todos los trabajadores.

El otro objetivo del proyecto socialista, y que contempla el despacho de la comisión, es hacer una ley que no consista en unas cuantas palabritas teóricas, en unos cuantos principios abstractos que no puedan convertirse en realidad concreta, sino en darle un mecanismo tal que pueda hacerse efectiva automáticamente, por virtud de la acción de los primeros interesados, es decir, los propios trabajadores. Porque la inspección del trabajo es entre nosotros de una eficacia más que dudosa; y en todos los países, aun los más adelantados, donde existe desde hace mucho tiempo una inspección de trabajo, se trata de una función costosa y difícil de desempeñar. Una ley vive, sobre todo, cuando los interesados en ella son capaces de darle vida. Debe, pues, toda ley, tener un organismo administrativo tal que pueda el propio pueblo hacerla efectiva por sí misma sin necesidad de la función de tutela de una organización del estado. Las disposiciones del actual proyecto tendientes a este fin han sido tomadas del proyecto socialista, lo cual me es grato hacer constar.

Se ha inspirado la comisión también en la convención de Washington y, para disposiciones de detalle, en algunos otros proyectos de señores diputados, que han aportado ideas útiles al respecto. Pero no lleva rastros del famoso "código del trabajo" del poder ejecutivo, y conviene quede esta constancia clara en el Diario de Sesiones. El llamado "código del trabajo", con respecto al trabajo de las mujeres y los niños, como con respecto a otros puntos, no sólo no se ha propuesto señalar progreso alguno sobre nuestra pobre legislación social vigente, sino que ha tendido a un positivo retroceso.

En ese proyecto se han limitado las disposiciones reglamentarias a la capital federal, estableciendo para toda la república tan sólo una prohibición ge-

neral de ocupar a los menores de 12 años.

Con ese criterio de legislar exclusivamente para la capital federal, se hubiera reincidido, de haberlo aceptado la comisión, en el gravísimo error de la ley que va a ser reemplazada por el actual despacho, de establecer un régimen de civilización en la capital, de un poco de equidad para ella, y de mantener el resto del país en el sistema de barbarie, en el sistema de explotación a mansalva del trabajo de la mujer y del niño, diferencia que evidentemente ningún ciudadano argentino consciente puede aceptar si se da cuenta de su alcance.

No merece, por tanto, otra mención el proyecto de código del trabajo, como antecedente, pues no incorpora nada nuevo a la legislación vigente, a no ser disposiciones que carecen de aplicabilidad, y me referiré a una de ellas, porque un compañero me observó como laguna en el despacho de la comisión, al que me adhiero, la no existencia de la disposición referente a las parturientas, que figura y que reproduce el proyecto de código de trabajo del poder ejecutivo, que acuerda a las parturientas derecho al salario durante el período en que deben abandonar el trabajo.

A primera vista es una disposición simpática y útil. Pero hemos considerado todos los que hemos estudiado prácticamente esta cuestión sin ofuscarnos, y hemos llegado a la conclusión de que introducida con carácter incidental en una ley reglamentaria del trabajo, o no sería posible hacerla efectiva, o se volvería contra las propias obreras si se la estableciera en la única forma que admite una disposición incidental: como obligación de pago por parte del patrón.

El patrón que contrata el trabajo de la mujer toma en cuenta las condiciones en que debe hacerlo de acuerdo con la ley. De manera que si la ley le obliga a pagar a sus obreras el salario durante el período del parto, él calculará la erogación que esto le origine y reducirá el salario de las obreras, con la agravante de que lo reducirá con

un criterio comercial y de seguridad, es decir lo reducirá en proporción doble o triple al riesgo real, aumentando así sus ganancias so pretexto de humanidad y de garantizar a las obreras el goce del salario en caso de parto.

Esta cuestión sólo puede ser resuelta por el seguro social, que comprende también el seguro de maternidad. Mediante el reposo, no se podrá arrebatar del salario de la mujer lo que haya de pagársele en caso de parto. Gravitará sobre todos los obreros y empleados del país una contribución proporcional uniforme, sean hombres o mujeres. Es por eso que en mi proyecto de ley, y estoy seguro de que también éste ha sido el pensamiento de los colegas de comisión, no figuraba la disposición aludida, que siempre redundaría en perjuicio de las presuntas beneficiarias.

De las observaciones que he hecho a la comisión, dos que son de forma y una más bien de fondo, arregladas por ella, han quedado incorporadas al despacho. De modo que no tengo nada más que agregar sino invitar a los señores diputados que han tenido la paciencia de escucharme, a votar este proyecto.

Sr. Frugoni. — Pido la palabra.

Moderando un natural y vehemente impulso de simpatía he de fundar brevísimamente mi voto en favor de los proyectos en discusión, y muy especialmente en favor del que se refiere al amparo de la mujer obrera.

Son estas cuestiones, señor presidente, la traducción en el parlamento y en la ley de sentimientos y aspiraciones que por ser claros, sencillos y primarios, revelan todo un proceso de educación ambiente, de honestidad de una sociedad que se precia a sí misma, de la amplitud del alma colectiva: en una palabra, la capacidad de sentir. Pondera mi juicio como una profesión de fe, porque — al fin y al cabo — son la reminiscencia de aquellas escenas que impresionaron vivamente nuestra infancia, que mantienen a flote el optimismo de todos los luchadores, que tienen un fondo común de idealidad: el dolor.

Yo recuerdo las escenas de aquellas asambleas, de aquellos mítines turbulentos en los que se pedía más humanidad en la batalla del trabajo; recuerdo a los agitadores, de palabra cálida y de rostro bronceado por el fuego de la fragua; lo recuerdo a Gori, y a su señora esposa Gabriela, levantando como inscripcón de su bandera de lucha la reivindicación más justa y más santa, la de los derechos de las mujeres que trabajan. Y bien: ahora que parece dominarse la sordidez de la urbe mercantil, yo pregunto: los talleres y las fábricas donde se pide la colaboración del trabajo de la mujer, ¿deben tener algo de hogar? Las fábricas y talleres a los cuales tal vez deban ir nuestras compañeras el día en que les falte el pedazo de pan que con ellas compartimos, ¿han de tener algo de hogar? Evidentemente que sí. Deben ser la continuación del hogar mismo, el mejor estímulo para que se levante la familia como un baluarte irreductible de honestidad, de bienestar y de cultura, y para que se consume allí la expresión de la Roma de sus tiempos felices: dad a la república un hogar modesto, una familia unida, y legad un gran nombre ciudadano a la posteridad.

Yo soy respetuoso de la labor de los hombres ilustres de mi país, pese a mis propias pasiones. Sigo sus obras con esa veneración y con esa esperanza de días felices para mi pueblo y de gloria para mi patria.

Hay de esos hombres ilustres en esta cámara, señor presidente, y deseo vivamente que en sesiones como ésta timbren su pensamiento con palabras que nos trajera el eco de nobles luchas y de agitaciones en que se perfilan las calidades de los que ni las derrotas reducen ni los éxitos envanecen. Pero, ¿para qué voy a quitar a este momento la belleza que a todos nos domina?

Bastará citar dos frases, bien o mal de mi cosecha, con las que fundamentaba ese proyecto, tan modesto, sobre salas maternales. Decía: "La función de la maternidad es sagrada; la puericultura debe inculcarse como enseñanza práctica de una nueva moral de res-

peto y de delicadeza al sentimiento filial, que los engranajes de las máquinas no han de poder llevarse como girones de carne”.

Nada más (*Aplausos*).

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — En consideración en particular.

Sr. Bunge. — Hago indicación de que artículo que no se observe se dé por aprobado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Habiendo asentimiento así se hará:

—En discusión el artículo 1°.

Sr. Verduga. — Pido la palabra.

Por las mismas razones que ha aducido el señor miembro informante de la comisión al fundar este proyecto, y por las expuestas posteriormente por el señor diputado por la capital, doctor Bunge, yo pediría a la comisión quisiera introducir en este artículo una modificación estableciendo la edad de 14 años en vez de la de 12.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

La comisión no puede aceptar la modificación sugerida por el señor diputado por Buenos Aires, porque entiende que debe hacerse una distinción entre el límite de admisión de los menores para el trabajo industrial y el límite de edad para el trabajo agrícola.

Precisamente, la comisión ha tenido en cuenta la circunstancia de nuestro medio agrícola y ha creído que por ahora la legislación debía fijar este límite de doce años. Al hacerlo así puede informar, casi diría enorgullecida, que esta ley será la más adelantada del mundo, salvo la ley austriaca, que tiene disposiciones análogas.

En la conferencia internacional del trabajo de Ginebra se discutió el año pasado la adaptación de las convenciones de Wáshington al trabajo agrícola. Esas discusiones demostraron que por

ahora es un ideal lejano la reglamentación estricta del trabajo agrícola.

Por esas consideraciones, por las que informan toda la legislación positiva sobre la materia y por los antecedentes nacionales que la comisión ha tenido en cuenta, ha creído que lo que más podía hacer era elevar el límite fijado en el proyecto de código de trabajo enviado por el poder ejecutivo, en dos años, y mantener el límite de doce años para el trabajo rural y el servicio doméstico.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Deseo agregar alguna aclaración que quizá satisfaga al señor diputado por la provincia de Buenos Aires.

En realidad la objeción del señor diputado a este artículo se debe a una deficiente redacción, cosa que ocurre muchas veces en los despachos de comisión, en los cuales intervienen varias personas y se necesita encontrar una fórmula en la que todos estén de acuerdo.

Este artículo tendría el mismo sentido si dijera lo siguiente: Queda prohibido el trabajo de los menores de catorce años que no han cumplido el mínimo de instrucción obligatoria.

Este es el verdadero sentido del artículo. Lo que hay es que no se percibe claramente, debido a que esa disposición única está dividida en dos párrafos. El segundo párrafo, que completa el pensamiento que acabo de exponer, dice lo siguiente: Tampoco pueden ocuparse a mayores de esta edad — es decir doce años — que comprendidos en edad escolar no hayan completado su instrucción obligatoria. De manera que es exactamente lo mismo: se prohíbe el trabajo de los menores de catorce años que no han cumplido el mínimo de instrucción obligatoria.

La excepción que se autoriza confirma que éste es el sentido práctico que va a tener la ley, porque autoriza al ministerio de menores para que permita el trabajo de los mayores de doce y menores de catorce que no han cumplido el mínimo de instrucción escolar, siempre que ese menor presente cada semana, en la empresa en que trabaje,

el certificado de haber asistido a la escuela durante la semana anterior.

Por consiguiente, no se podrá en ningún caso ocupar a un menor de catorce años, a no ser que haya cumplido el mínimo de instrucción escolar o que siga concurriendo a la escuela.

Este es el alcance de estas tres disposiciones separadas.

Sr. Anastasi. — Hay algo más también, que tal vez satisfaga los escrúpulos del señor diputado por Buenos Aires.

En realidad, como dice el señor diputado Bunge, esta ley fija catorce años como mínimo de edad para el trabajo. Las excepciones son exclusivamente para el servicio doméstico y para el trabajo agrícola, en que se admite el mínimo de doce años si se ha cumplido la instrucción obligatoria. No se admite ninguna otra excepción.

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra.

Tal vez hemos de encontrar la manera de satisfacer los deseos del señor diputado por Buenos Aires del espíritu y de la letra del despacho de la comisión.

Esta mañana, conversando con el señor diputado Bunge, le hice presente algunas observaciones al despacho, siendo una de ellas la de que el proyecto comienza con una excepción, cuando en realidad debiera empezar por la regla. Debería comenzar por establecer que el trabajo de los menores sólo se permitirá a los 14 años; en cambio comienza con la excepción, que provoca la justa objeción del señor diputado, aunque más adelante, en los artículos que siguen, se hacen las aclaraciones pertinentes.

Propongo que se anteponga el artículo que se refiere al trabajo general de los niños en los establecimientos fabriles, con lo cual la ley comenzará como debe comenzar.

Creo que en esta forma el señor diputado por Buenos Aires quedará satisfecho.

Sr. Verduga. — Pido la palabra.

Ni las explicaciones dadas por el miembro informante ni las suministra-

das por los señores diputados Bunge y Dickmann me satisfacen.

Puedo estar equivocado, pero mi concepto es el siguiente: creo que los niños menores de catorce años no están todavía en condiciones de trabajar, no sólo por las razones educacionales a que ha aludido el señor diputado Bunge, sino por razones de salud.

Precisamente, la excepción a que se refiere el señor miembro informante es la que menos me satisface, porque considero que tratándose de quehaceres domésticos y de los trabajos en las fábricas es cuando más exigentes debemos ser para fijar el mínimo de edad.

A diario, señor presidente, todos los señores diputados han de haber contemplado este cuadro en las calles de nuestra capital: criaturas pequeñas, raquíticas, que hacen de niñeras de niños robustos, que pesan 15 y 20 kilos. Esas criaturas están prestando un servicio espléndido, pero al prestarlo se conspira contra su salud y su desarrollo, contra su vida.

Yo me explicaría que, como excepción, en la campaña pudieran trabajar; pero casualmente no se hace excepción, sino que se incluye a todos desde los doce años, comprendiendo el servicio doméstico y los trabajos rurales.

Puedo estar equivocado, pero insisto en mi proposición de que se limite la edad para el trabajo de los niños a los catorce años en lugar de doce, ya que no he tenido la suerte de que la comisión acepté.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Para hacer una indicación al señor diputado Verduga, que creo le permitirá quedar satisfecho, si la cámara está de acuerdo con su opinión, sobre una forma que yo, por mi parte, estoy dispuesto a votar: que por ahora deje votar el artículo como está, en el sentido de que no se ocupe en el servicio doméstico a los menores de doce años. Al tratarse el artículo 2.º, que dice que ningún menor de catorce años podrá ser ocupado en caso alguno en explotaciones o empresas comerciales, sean privadas o públicas, de lucro o de beneficencia, a excepción de aquellas en que sólo trabajen los miembros de la misma fa-

milia, podría el señor diputado Verduga proponer, como intercalación, a este artículo, se diga que ningún menor de catorce años podrá ser ocupado en caso alguno en el servicio doméstico, ni en explotaciones, etcétera.

De otro modo, para atender las objeciones de forma, habría que reformar toda esta parte de la ley, es decir, reunirse de nuevo la comisión y retirar su despacho, para encontrar una nueva fórmula.

Sr. Dickmann (A.). — No quiero perturbar la sanción de la ley, pero entendía que la indicación que hemos formulado no carece de lógica.

Sr. Anastasi. — Es lógica, señor diputado; pero la comisión encontró exacta la redacción del despacho anterior que era muy buena, que casi diría es una excepción en materia de leyes de trabajo, y por eso, prefirió no modificar la redacción ya hecha.

Sr. Vrduga. — Según el señor diputado por la capital, doctor Bunge...

Sr. Bunge. — Si la cámara, al votarse el artículo 2.º, apoyara la indicación del señor diputado, de comprender el servicio doméstico en la prohibición, quedaría automáticamente eliminada, por secretaría, la inclusión del trabajo doméstico en el artículo 1.º.

Sr. Muzio. — Pido la palabra.

Para apoyar la indicación del señor diputado por la capital, doctor Adolfo Dickmann, para que figure como artículo 1.º el artículo 2.º porque la ley es de fondo sobre esta materia. Esta reforma de la ley sobre trabajo de las mujeres y niños en las partes más fundamentales es tomada de la convención del trabajo reunida en Washington en octubre de 1919, porque el artículo 2.º del despacho es casi textualmente al 2.º de esa convención. Establece que el trabajo de los menores en las industrias y en el comercio no podrá ejercerse por menores de catorce años. Así que el fondo, el propósito de la ley, debe figurar como artículo 1.º y no el caso de excepción, del trabajo de los menores que se emplearan en las industrias rurales o agrícolas. De manera que la comisión debería ser la primera en aceptar eso, que es fundamental, sorprendiéndome que así no

lo haya hecho. Agregaré, de paso, que la legislación del país está en retardo, porque, según el informe de los miembros argentinos que han asistido a la convención, entre los cuales estaba el actual presidente de la comisión de legislación del trabajo, deberían estar en vigencia las cláusulas de aquella, o ser incorporada a la legislación positiva de los países que ratificaran sus acuerdos desde el primero de julio de 1922, como último plazo, y resulta que estamos recién discutiéndola después de esta fecha.

Nada más.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

La observación que hace el señor diputado es de forma y la comisión no la acepta por la razón ya enunciada de que ha respetado la redacción del anterior despacho, que ha conceptuado buena.

Los motivos que expone el señor diputado son erróneos. El artículo 2.º no es una reproducción textual de la convención de Washington, desde el momento que ésta se refiere a la industria. Ese artículo tendría más bien su antecedente en un proyecto que, si mal no recuerdo, presentó la diputación socialista y fundó, creo, el señor diputado Bunge en 1916 o en 1918. Observo entonces a la cámara que el artículo 2.º no es una reproducción fiel de la convención de Washington, que, por el contrario, es una ampliación, porque la convención de Washington se refiere a la industria y este artículo se refiere a la industria y al comercio.

En cuanto a las demás observaciones, colocar primero el artículo 2.º y después al artículo 1.º, debo decir que desde el momento que el proyecto ya estaba redactado en esa forma, la comisión no encuentra motivos fundamentales para modificarlo.

Por estas razones, la comisión no acepta la observación del señor diputado Muzio, y no tendrá tampoco posiblemente, ningún inconveniente en votar en el artículo 2.º la proposición del señor diputado por la provincia de Buenos Aires. Por el contrario, la comisión celebra que miembros de esta cámara tengan un criterio más radical que ella

misma en materia de legislación del trabajo. Es un hecho que, como estaba diciendo hace un momento a mi colega el señor diputado por la capital doctor Bunge, nos halaga. Yo mismo en la comisión de legislación del trabajo encontré que los demás componentes, distinguidos médicos todos ellos — y no estaba en esos momentos el señor Bunge, — propusieron, y yo la acepté, una modificación en lo que se refiere a la protección de la maternidad, que a mí me pareció, francamente, demasiado avanzada para el estado actual de la legislación argentina, no obstante lo cual la acepté complacido.

Si la cámara quiere votar la proposición del señor diputado por Buenos Aires, nosotros no seremos para ello ningún inconveniente, ni mucho menos. Será la ley argentina la primera ley del mundo que fijará un *mínimum* de edad tan elevado para el servicio doméstico. Posiblemente el señor diputado en este sentido tiene razón: los mismos motivos que deciden a reglamentar el trabajo en la industria y en el comercio, deben pesar para hacerlo respecto del servicio doméstico, donde muchas veces la explotación es quizás mayor y mucho más intensa, como un resabio de la primitiva servidumbre que fué una de las costumbres de nuestro régimen colonial y aun del régimen que siguió al coloniaje.

Sr. Muzio. — Deseo manifestarle al señor miembro informante de la comisión de legislación del trabajo y ex delegado del gobierno argentino a la conferencia de Wáshington, que tengo en mis manos la copia textual del informe presentado por el señor diputado, que expresa casi textualmente lo que dice el artículo 2.º del despacho.

Dice que los menores de catorce años no pueden ser empleados o trabajar en los establecimientos industriales públicos o privados o en sus dependencias, a excepción de aquellos en que sólo son ocupadas personas de una misma familia.

Es casi textualmente lo que nos propone en el artículo 2.º la comisión; y me extraña que siendo ese el origen

fundamental de la reforma, el ex delegado argentino a esa conferencia y presidente de la comisión de legislación del trabajo no lo haya tenido presente, a mi juicio, como artículo 1.º, es decir, fundamental.

Sr. Anastasi. — Vuelvo a repetirle al señor diputado que el artículo nuestro es más amplio que el de la convención de Wáshington y la lectura que ha hecho el señor diputado no hace sino confirmar mi observación. El artículo nuestro es más amplio. La convención de Wáshington ha legislado sobre el trabajo de los menores en la industria. Hasta ahora ninguna conferencia internacional ha legislado sobre el trabajo de los menores en el comercio; ni siquiera ha legislado sobre el trabajo de los menores en la agricultura; se han limitado en todo caso a emitir recomendaciones. Y en cuanto al servicio doméstico, le afirmo terminantemente al señor diputado que no conozco actualmente una sola ley en el mundo que fije el *mínimum* de admisión de catorce años. Pero no por ello vamos nosotros a dejar de acompañar al señor diputado por la provincia de Buenos Arise, si la cámara lo entiende así.

Sr. Amuchástegui. — Pido la palabra. Deseaba pedirle al señor diputado Verduga que propusiera el articulado que algunos diputados pensamos votar en el sentido de que se prohíba en absoluto el trabajo de los menores de catorce años en toda clase de establecimientos industriales o comerciales y en el servicio doméstico, haciendo excepción de los trabajos rurales, en los cuales podría regir la disposición del artículo 1.º, de los doce años.

Sr. Bunge. — Así va a quedar precisamente.

Sr. Amuchástegui. — Yo desearía eso, porque voy a votar ese artículo para que quede como primero, como base fundamental de la ley, tal cual lo ha expresado muy acertadamente el señor diputado Dickmann. No debemos pensar si somos los primeros o los últimos en dar a los niños de 14 años la posibilidad de que en nuestro país se desarrollen física y mentalmente, co-

mo deseamos, sin aplicar ninguna disposición extranjera ni leyes de otros países, sino exclusivamente adoptando para nosotros lo que nos parece más conveniente, y es por ese motivo que viene la excepción de los trabajos rurales, que es lo único que debemos exceptuar.

Por esta razón, y para que la ley salga bien y armónica, acepto la indicación del señor diputado Dickmann... y no sé si el señor diputado Verduga propondrá, si no lo propongo yo, como una disposición de carácter general, la prohibición de ocupar menores en toda clase de establecimientos industriales, comerciales y servicio doméstico, permitiéndolo solamente los trabajos rurales.

Sr. Bunge. — Pido la palabra para hacer una aclaración, pues ella convendría para que el debate no se hiciera extenso y evitar múltiples objeciones.

Después de indicar al señor diputado Verduga que su observación quedaría resuelta incorporando al artículo 2.º el agregado de la prohibición del trabajo en los servicios domésticos, consulté a los demás miembros de la comisión, y están conformes en que se incorpore a la prohibición del trabajo de los menores en industrias y comercio la prohibición en el servicio doméstico; de manera que el artículo 2.º quedaría en la actualidad modificado en esa forma: "en el servicio doméstico ni en..." etc.

En el artículo 1.º quedaría suprimida la mención del servicio doméstico.

Sr. González Calderón.—Pido la palabra para fundar una moción de orden.

El despacho de la comisión y el proyecto han llegado a mi conocimiento, como a la mayor parte de los señores diputados, recién esta tarde. No hemos tenido tiempo de estudiarlo con la detención que reclaman la importancia y la trascendencia del asunto.

Yo, por mi parte, no estoy en condiciones de afrontar la discusión sobre muchas cuestiones que están comprendidas en ese proyecto. Tengo los mismos propósitos de otros señores dipu-

tados para que se sancione una ley en el sentido de la que se propone. Tengo también el deseo, como el señor diputado Amuchástegui, de que esta ley salga de la honorable cámara todo lo más perfecta que sea posible, pero me asaltan en este momento, al leer con rapidez este proyecto, dudas muy serias sobre la constitucionalidad de muchas de sus disposiciones. Una cuestión semejante suscitó hace pocos años en el senado, al discutirse la ley reglamentando el trabajo a domicilio. En esa oportunidad el señor senador Melo propuso la modificación al primer artículo de ese proyecto. En términos generales, referíase el proyecto a todo el territorio de la nación y el señor senador Melo consiguió que se modificara ese artículo en el sentido de que esas disposiciones legales se aplicaran solamente a la capital y a los territorios nacionales.

Es bien sabido por todos los señores diputados que hay que hacer una distinción fundamental entre lo que concierne al contrato de trabajo y lo que se refiere a las condiciones del mismo.

En cuanto a lo primero, el congreso nacional tiene un poder absoluto, como lo dispone terminantemente un artículo de la constitución nacional; pero lo que hace al trabajo en fábricas y talleres concierne a los poderes de policía de las provincias; y nosotros, al aprobar muchas disposiciones del proyecto que se considera por la honorable cámara, invadiríamos los fueros de las provincias si entráramos a legislar en ese orden que comprenden dichos poderes de policía que ellas conservan; y la corte suprema de justicia, en reiterada jurisprudencia, ha declarado que ellos son inalienables por las mismas.

El señor doctor Matienzo, cuando presidía el departamento del trabajo, en un luminoso informe, de 1907, dijo estas palabras que conviene recordar: "La reglamentación del trabajo en la República Argentina no puede asumir la forma unitaria que presenta en Francia, Italia, Bélgica, España y otras naciones europeas, cuyas leyes se suelen invocar como ejemplo en esta materia.

Si no queremos exponernos a que la suprema corte invalide por inconstitucionales las leyes reguladoras del trabajo, es indispensable que ellas se ajusten a la constitución de la nación, distinguiendo los asuntos de carácter federal y los del fuero provincial”.

En virtud de estas razones, declaro francamente que no estoy en condiciones de afrontar en seguida la discusión de este proyecto, y de acuerdo con una disposición reglamentaria, hago moción de aplazamiento para una sesión próxima, con el propósito de compenetrarme por completo del sentido y de la trascendencia de las disposiciones que contiene.

Nada más.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

La comisión se opone decididamente a la moción de aplazamiento formulada por el señor diputado por Entre Ríos. Considera que este despacho comprende una cantidad de cuestiones conocidas por todos los señores diputados, que han sido resueltas en copiosos antecedentes legislativos, que tienen antecedentes de doctrina respetables y autorizados, y que son parte de la legislación del trabajo hoy día.

El señor diputado por Entre Ríos, que es un constitucionalista distinguido...

Sr. González Calderón. — Muchas gracias.

Sr. Anastasi. — ... es el que menos puede invocar falta de información para tocar un punto como el que se ha rozado en este debate, haciendo una referencia al discurso del señor senador Melo sobre la ley del trabajo a domicilio, que contiene disposiciones procesales y municipales...

Sr. González Calderón. — Este proyecto también las tiene.

Sr. Anastasi. — La comisión cree que no sólo el señor diputado, sino todos los señores diputados, están en la obligación de conocer la materia que comprende la reglamentación del trabajo de las mujeres y de los niños. No ganaremos absolutamente nada con un aplazamiento, porque si esto no se sabe hoy, no se sabrá tampoco mañana.

La comisión está en posesión de todos los antecedentes que se le requieran. Por ejemplo, si se le piden los de carácter constitucional, no tiene inconveniente en referirse e indicar los que constan en los diarios de sesiones de 1904, con motivo de la discusión de la ley de descanso dominical de 1907 cuando se discutió la ley del trabajo de las mujeres y de los menores; de 1912, cuando se discutió la ley orgánica del departamento del trabajo; y en fin, de 1918, cuando se consideró la ley de trabajo a domicilio.

Si se ha de proponer que esta ley sea sólo aplicable a la capital federal, desde ya la comisión afirma ante la honorable cámara que se opondrá terminantemente a eso, que consideraría como una práctica regresiva en nuestras leyes de trabajo, y sobre todo para esta cámara, que el año pasado sancionó las leyes de pago de salarios, que hizo extensiva a toda la república, y la ley de las ocho horas, cuyos beneficios hizo extensivos también a toda la república. Todas estas reglamentaciones debe dictarlas el congreso por mandato imperativo, por disponerlo así el artículo 67, inciso 11 de la constitución nacional, que confiere al congreso la facultad de dictar el código civil, y ya que la reglamentación del trabajo, las condiciones en que se efectúa el trabajo, la capacidad o incapacidad del locador de servicios o del que presta los servicios son, en una palabra, simples ampliaciones de los títulos de las obligaciones de hacer y del contrato de locación de servicios que contiene el código civil.

Sr. González Calderón. — ¿Me permite el señor diputado?...

Sr. Anastasi. — En seguida voy a terminar.

Por otra parte, señor presidente, países como los Estados Unidos, que tienen su derecho civil limitado a cada uno de los estados, donde cada estado dicta su ley de matrimonio, su ley de divorcio, países como esos han realizado una campaña tan intensa como la que se ha desenvuelto allí para obtener la sanción de leyes de trabajo de menores haciendo obligatoria la fija-

ción del límite de edad para todo el territorio de los Estados Unidos. La corte ha declarado inconstitucional por dos veces la ley, y se apresta sin embargo el congreso a dictar la tercera ley, porque no obstante la circunstancia apuntada de que el derecho civil pertenece a cada uno de los estados, el congreso de aquel país considera que él debe reglamentar el trabajo de los menores.

Si nosotros, pues, con un derecho civil nacional, abordamos semejante cuestión, se me ocurre que vamos a estar en franco regreso.

Por otra parte, los países federales tienden todos a la unificación de las leyes de trabajo. Estas son federales en Alemania y en Suiza y no son federales en Canadá, Estados Unidos y Australia por impedirlo expresamente la constitución; pero no obstante, hay una cantidad de materias de orden federal sobre las cuales el respectivo poder legislativo fija normas.

Por estas razones, que no quiero ampliar más, la comisión ruega a la honorable cámara que no vote la moción de aplazamiento formulada por el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. González Calderón. — Pido la palabra.

Debo decir, en primer lugar, que la moción que he formulado para que se aplaee la consideración de este asunto no tiene la intención reservada de que se modifiquen en tal o cual sentido las disposiciones que se proyectan. En segundo lugar, debo decir al señor diputado por la capital que me da un argumento más en apoyo de mi moción de aplazamiento: si lo suprema corte ha declarado por dos veces inconstitucionales determinadas disposiciones legales, debemos tratar de evitar una situación semejante.

Sr. Anastasi. — No hay peligro.

Sr. González Calderón. — Por eso es necesario que estudiemos este asunto los que no hemos tenido la suerte del señor diputado de documentarnos y prepararnos con anticipación para abordar esta cuestión, disponiendo así de mayor tiempo a ese fin.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Hay un viejo cuento de Wáshington Irving: a fines del siglo XVII un hombre se perdió en un bosque vecino a su aldea; durmió allí mucho tiempo y cuando despertó se encontró con que todo se había transformado. Había dormido un siglo porque había llegado a una región encantada. Sin el menor propósito de mortificar al señor diputado por Entre Ríos, la objeción que acaba de hacer me recuerda el caso de ese personaje legendario, porque la cuestión que plantea ahora ha sido planteada en la cámara y resuelta de hecho hace ya diez y siete años. Hace diez y siete años que rige la ley reglamentaria del trabajo de mujeres y niños, que prohíbe la ocupación de menores de diez años en toda la república, y a nadie se le ha ocurrido poner en duda la constitucionalidad de esa prohibición.

Sr. González Calderón. — Hay una disposición del proyecto, la del artículo 6.º...

Sr. Bunge. — El hecho de que durante diez y siete años ningún empleador deseoso de hacer de negrero se haya atrevido a tachar la ley de inconstitucional, es suficiente para acallar los escrúpulos constitucionales del señor diputado para su aplicación de ahora en adelante.

Además, ya que el señor diputado invoca la constitución, como no soy constitucionalista, tengo la pretensión de entenderla de acuerdo con el claro buen sentido medio de la gente de la calle, y con ese claro buen sentido medio de la gente de la calle he leído, mientras el señor diputado hacía sus objeciones de orden constitucional, algunos artículos para refrescar mi memoria, y he encontrado el artículo 14 que dice lo siguiente: "Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio a saber: de trabajar, de ejercer toda industria lícita..." Entonces, con el buen criterio del hombre de la calle me digo: deben dictarse leyes para reglamentar el ejercicio del trabajo... leyes para declarar qué indus-

tria es lícita y cuál ilícita. Este proyecto que ahora discute la cámara declara ilícita la ocupación de niños y de mujeres en determinadas industrias insalubres.

Pero hay además otro artículo, que me permito recordárselo al señor diputado, que es de provincias: el inciso 16...

Sr. González Calderón. — Del artículo 67.

Sr. Bunge. — Del artículo 67 — cuyo inciso 11 le ha recordado otro señor diputado. Si lo recuerda el señor diputado tan bien, es realmente gracioso que haga estas objeciones constitucionales, porque ese inciso dice: "proveer lo conducente a la prosperidad del país y al adelanto y bienestar de todas las provincias". ¿Pone en duda el señor diputado de que no proveerá al adelanto y bienestar de la provincia de Entre Ríos el prohibir explotar como negros esclavos a los niños y a las mujeres nacidos en la provincia?

Sr. González Calderón. — Yo no me he referido a eso.

Sr. Bunge. — Es evidente que no.

Sr. Quirós. — La provincia de Entre Ríos ha sancionado una legislación del trabajo mucho más avanzada que ésta.

Sr. Bunge. — Como esto forma parte de la reglamentación de la locación de servicios, ya invocada por el señor diputado Anastasi, miembro informante de la comisión, me parece evidente que con el objeto de promover al bienestar general, con el objeto de reglamentar el ejercicio del trabajo y de las industrias lícitas, el congreso nacional puede y debe — y deben hacerlo las provincias en ausencia de una legislación nacional — reglamentar el trabajo de las mujeres y de los niños.

Sr. Quirós. — ¿De manera que el señor diputado declara incapaces a las legislaturas de las provincias argentinas trabajo?

Sr. Bunge. — Acabo de decir que en ausencia de una legislación general las provincias pueden y deben hacerlo.

Sr. Quirós. — Pues la provincia de Entre Ríos tiene una legislación sobre el trabajo más nutrida y más avanzada que ésta.

Sr. Bunge. — Si así fuera, felicito a la provincia de Entre Ríos.

Sr. Quirós. — Pero la observación del señor diputado González Calderón es de orden constitucional.

Sr. Anastasi. — Lo que no se podrá negar es que el congreso de la nación tiene la facultad de dictar el código civil.

Sr. González Calderón. — Es discutible la facultad de disponer que las mujeres y los menores de diez y ocho años que trabajen en horas de la mañana y de la tarde tendrán un descanso de dos horas al medio día, porque esto no hace al contrato de locación de servicio y si a las condiciones del trabajo en las fábricas. El señor diputado Bunge, que ha leído los artículos 14 y 67 de la constitución, ha debido leer el 104 que es la clave maestra para interpretarla: las provincias conservan los poderes que no han delegado al gobierno de la nación.

Sr. Anastasi. — Precisamente el inciso 16 del artículo 67 se refiere a un poder del congreso nacional.

¿Considera el señor diputado que el Código de Comercio ha invadido la jurisdicción de las provincias cuando obliga al patrón a dar un mes de sueldo al empleado que ha despedido sin justa causa? ¿Considera que esa disposición es inconstitucional?

Sr. González Calderón. — No conozco ninguna sentencia de la corte al respecto.

Sr. Cafferata. — Estamos fuera de la cuestión. Entiendo que estas observaciones que se refieren a la constitucionalidad de la ley deben hacerse cuando llegue el momento de establecer si la ley se aplicará a la capital federal y territorios nacionales o a todo el territorio de la república. En este momento esas objeciones están fuera de lugar.

Sr. Dickmann (A.). — Descartaría saber si el señor diputado ha hecho alguna indicación.

Sr. Cafferata. — Ninguna. Era una aclaración.

Sr. Dickmann (A.). — Con motivo de haberse enunciado un pedido de pos-

tergación, se está tratando el fondo mismo de la cuestión de si la ley es o no constitucional. Considero que antes de entrar a este debate, previamente debe resolverse la postergación solicitada.

Yo sé, porque he seguido de cerca la legislación del trabajo, que cada vez que la cámara se dispone a tratar una ley que protege a los trabajadores, surgen estos escrúpulos constitucionales...

Sr. Quirós. — No tiene razón el señor diputado.

Sr. Dickmann (A.). — Siempre surgen estos escrúpulos constitucionales, que en cambio no se tienen cuando se trata de dictar leyes evidentemente inconstitucionales, como la que dictó este congreso en el año del centenario y que coartaba libertades fundamentales de la constitución.

Sr. González Calderón. — Yo no estaba en la cámara.

Sr. Dickmann (A.). — De estar la habría votado, por el espíritu del señor diputado demostrado en este debate.

Sr. González Calderón. — El señor diputado no tiene derecho de adivinar intenciones.

Sr. Dickmann (A.). — El señor diputado, so pretexto de no estar preparado para el debate, hace una indicación de postergación; sin embargo, ha demostrado conocer a fondo todas estas cuestiones; y yo apelo a su lealtad para que entre a ese debate inmediatamente, ya que es tan bien preparado y que no venga a traer el socorrido expediente, que siempre se ha usado en estos casos, de postergar... (*¡Muy bien! Aplausos*).

Señor presidente: no me extraña que venga de la derecha esa proposición, porque todavía no han llegado a la derecha los ecos del momento en que estamos viviendo y de los anhelos de la clase trabajadora.

Estamos comprobando con placer que en el centro y en la izquierda se empieza a comprender estos problemas. Y como un verdadero orgullo para el país la cámara inicia estas sesiones en una forma que la honra. Siempre se habían

empezado los períodos en forma trivial, y esta vez — la segunda sesión ordinaria del período — estamos discutiendo una de las cuestiones más fundamentales para la república. Deben comprender los señores diputados de la derecha — si es que se solidarizan con las manifestaciones que de allí han partido hace un momento — que no se puede seguir por ese camino.

Yo lo invito lealmente al señor diputado por Entre Ríos a retirar su indicación, para que continuemos debatiendo todo el tiempo necesario y que él haga las objeciones que quiera hacer, que las escucharemos con sumo placer.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Sánchez Sorondo. — Entiendo que el señor diputado Cafferata firma el despacho de la comisión.

Sr. Cafferata. — Exactamente. Iba a hacer esa observación al señor diputado Dickmann. Iba a recordarle que en la comisión de legislación del trabajo figura un miembro de la derecha, que firma el despacho.

Sr. Dickmann (A.). — Me alegro mucho. El señor diputado se ha manifestado siempre a favor de estas cosas, por espíritu cristiano...

Sr. Cafferata. — Entonces no puede aludir a la derecha.

Sr. Sánchez Sorondo. — Es un caso de coincidencia entre el socialismo y el cristianismo.

Sr. Uriburu. — Pido la palabra.

A mi modo de ver se está partiendo de un error. Nadie se opone a esta ley. Un señor diputado acaba de recibir en la sesión de hoy la orden del día donde figura este proyecto que afecta altos intereses públicos. Ese diputado se permite decir a la cámara que no tiene en este momento la preparación suficiente y pide a sus colegas la suspensión de este asunto hasta tanto que esté en las condiciones...

Sr. Dickmann (A.). — El señor diputado ha revelado una preparación extraordinaria.

Sr. Uriburu. — Perfectamente. Pero no la tenemos todos. Ya sabe el señor diputado que la naturaleza es injusta. A unos les da mucho, a otros les da poco. (*Risas*).

Sr. Dickmann. — Pero el señor diputado tiene una brillante actuación parlamentaria.

Sr. Uriburu. — Entonces, señor presidente, de lo que se trata sencillamente de que el señor diputado por Entre Ríos — y tantos otros diputados que estamos en las mismas condiciones, — nos compenetraremos debidamente del articulado de esta ley, para poder emitir nuestros votos con toda conciencia. Todo eso de “la derecha” y de las “ideas nuevas” y las cosas que vamos a hacer y no vamos a hacer, son argumentos de menor cuantía que no pueden impresionar la serenidad de la cámara.

He dicho.

Sr. Toledo. — Pido la palabra.

Voy a apoyar la moción en el sentido preciso de que se fije un día especial para que se presiga la discusión de este despacho.

Yo también, como el señor diputado, he llegado hoy de mi provincia y me he encontrado con que recién llegaba la orden del día.

Sr. Bard. — Debía haber estado ayer.

Sr. Toledo. — La mayor parte de los diputados estamos en las mismas condiciones. Y yo, con el mismo espíritu que asiste a los autores del proyecto y a los miembros de la comisión que lo han despachado, como representante de una provincia eminentemente industrial y como miembro de un partido democrático, representante de los intereses proletarios de mi provincia, estoy interesado en que surja de la discusión una ley que haga honor al congreso argentino y que consulte realmente y con toda previsión los intereses de la democracia y del proletariado del país.

En tal sentido, apoyo la moción que se fije un día especial para tratar este asunto, seguro como estoy que esta honorable cámara ha de dar su voto al proyecto en discusión.

Sr. Rodeyro. — Pido la palabra.

He solicitado la palabra para hacer una observación a la honorable cámara.

Cuando votamos los días de sesión, el doctor Dickmann, diputado por la capital, propuso que las sesiones se realizaran los lunes miércoles y viernes. Muchos señores diputados se opusieron

diciendo que tenían que ir a sus provincias, y este argumento que se invocó para impugnar un horario tan práctico, se invoca ahora para obstruir la sanción de este proyecto, que con tan buen criterio la cámara ha resuelto tratar al iniciar sus sesiones.

Cada diputado tiene la obligación de enterarse de todo lo que va a ocurrir en la sesión, de conocer el despacho de la comisión, y de estar en la capital, para trabajar; y no pueden hacer esta clase de argumentos si se ausentan por sus comodidades personales.

Quería dejar constancia de esto; nada más. (*Aplausos*).

Sr. Amuchástegui. — Pido la palabra.

Quiero recoger algunas palabras del señor diputado Rodeyro.

Yo no me he ausentado de la capital; he estado constantemente aquí; conozco todos estos problemas, aunque quizás con menos suficiencia que algunos señores diputados; y ahora procuraré su resolución más conveniente, oyendo a la comisión, en ciertos detalles que son muy interesantes; pero declaro con la mayor sinceridad que esta no es la forma de sancionar leyes.

En el congreso deliberante de la capital he tenido oportunidad de estudiar estas cuestiones, que quizás fueran de carácter municipal; pero aunque le dé mi voto, permaneciendo también en mi banca hasta su sanción definitiva, vuelvo a declarar y a dejar constancia de que no es esta la manera de sancionar leyes, que se presentan para su sanción sin tener los diputados siquiera veinticuatro horas para estudiarlas.

Sr. Cafferata. — Pero hay una resolución de la cámara de tratar el asunto hoy.

Sr. Bard. — Y que el señor diputado ha votado ayer.

Sr. Amuchástegui. — Ningún diputado, si se exceptúa a los miembros de la comisión y algunos pocos que tienen estudios especiales hechos sobre esta materia, está en situación de poder votar conscientemente esta ley sin estudio previo, sin que haya sido presentado a los diputados con veinticuatro ho-

ras de tiempo — cuando menos — para conocer muchos de sus detalles. Aunque la simple lectura del proyecto me ha bastado para comprobar la necesidad de hacer algunas ligeras modificaciones...

Sr. Bas. — ¿Por qué no las ha propuesto, señor diputado?

Sr. Frugoni. — ¡A los electores se les promete una cosa, y cuando se llega aquí se burlan las promesas al electorado! (*Aplausos*).

—Varios diputados hablan a la vez y el señor presidente hace sonar la campana.

Sr. Amuchástegui. — Quiero afirmar, en virtud de la manifestación que acaba de hacer el señor diputado Frugoni, que lo que yo haya prometido al electorado lo he de cumplir. Pero vuelvo a repetir que me he de oponer siempre a esta manera de sancionar leyes presentadas con tanta precipitación.

Sr. Rodeyro. — Pido la palabra.

Quiero hacer notar una contradicción evidente en que acaba de incurrir el señor diputado Amuchástegui: ayer se propuso tratar sobre tablas el asunto, y el señor diputado fué de los que votaron favorablemente.

Sr. Amuchástegui. — Yo no me opongo; analizaré y votaré la ley. No quiero ningún aplazamiento, entienda bien el señor diputado.

Sr. Dickmann (A.) — Y nosotros pedimos la postergación para hoy.

—Varios señores diputados hablan a la vez y el señor presidente hace sonar la campana.

Sr. Frugoni. — Pido la palabra para decir estas pocas: que las cátedras de legislación del trabajo de la facultad de derecho no sirven para nada. (*Risas*).

Sr. Bard. — Es que la han incorporado recientemente.

Sr. Bunge. — Una moción de orden se discute brevemente. Que se vote.

Sr. Quinteros. — Pido la palabra.

Yo voy a votar este proyecto, porque no puedo pedir a la cámara el

tiempo prudencial de seis meses para estudiar derecho constitucional: hago fe en el despacho de la comisión.

Sr. Dickmann (A.) — Hago indicación de pasar a la orden del día.

Sr. Bunge. — Hago indicación de que se vote para que se cierre el debate.

Sr. Dickmann (A.) — He hecho una indicación que es reglamentaria: pasar a la orden del día.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — La moción del señor diputado por la capital es previa, según el reglamento, a toda otra moción.

Sr. Sánchez Sorondo. — ¿Cuál es la orden del día?

Un señor diputado. — La que estamos discutiendo.

Sr. Sánchez Sorondo. — Entonces, ¿cómo se va a pasar a la orden del día?

Sr. Dickmann (A.) — Estamos en una incidencia, y pasar a la orden del día significa descartar la incidencia.

Sr. Sánchez Sorondo. — Basta con votar en contra de la moción de aplazamiento.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Para el desarrollo de la discusión hubiera sido mejor votar la moción del señor diputado por Entre Ríos; la votación negativa importaría volver a la orden del día.

Sr. Dickmann (A.) — No tengo inconveniente.

Sr. Bas. — Si el señor diputado hiciera su aplazamiento para el día fijo — para el miércoles, por ejemplo, — yo la votaría con el mayor gusto, porque creo que no se puede extorsionar los diputados obligándolos a considerar inmediatamente proyectos que no se han repartido en la orden del día.

Sr. Anastasi. — Sería el segundo aplazamiento.

Sr. Rodeyro. — Y con despacho y resolución de la cámara de tratarlo hoy. La cámara, por gran mayoría de los mismos que hoy se oponen, resolvió que se tratara hoy.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y el señor presidente hace sonar la campana.

Sr. Maidana. — Pido la palabra.

Creo que está agotado el debate sobre la moción y que ella debe votarse para seguir adelante. Anuncio que yo he de votar en contra.

Hago moción de que se cierre el debate sobre este punto.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar la moción de cerrar el debate.

—Se vota y resulta afirmativa de 42 votos sobre 80 señores diputados.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar si se aplaza la consideración de este despacho hasta la sesión del miércoles como primer asunto.

—Se vota y resulta negativa contra 24 votos.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Continúa la consideración del despacho.

Sr. Verduga. — Quiere decir que la comisión acepta la modificación que propongo...

Sr. Anastasi. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — La comisión ha aceptado colocar en el artículo 2.º la modificación, y de hecho ha quedado suprimido en el primero.

Sr. Verduga. — Entonces hay que votar la primera parte, suprimiendo "y servicio doméstico".

Sr. Sánchez Elía. — Pido la palabra.

Entiendo que si el artículo 2.º se va a votar con la modificación propuesta por el señor diputado por Buenos Aires, resultará absolutamente ineficaz y quizás sin razón de ser.

En el artículo 1.º se dice: "Tampoco podrá ocuparse a mayores de edad de doce años que estén comprendidos en la edad escolar" ¿Qué se entiende por estar comprendido en edad escolar? ¿Se trata de la edad fijada por la ley nacional o por cada una de las leyes provinciales? La fijación de la edad de doce años tiene razón de ser en la capital, pero no en las provincias, que pueden establecer otras eda-

des; y donde establezcan la de catorce años el artículo no tendrá razón de ser.

Por esto creo que basta votar simplemente el artículo 2.º y no el artículo 1.º.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Por una consideración de forma, el señor diputado propone que se suprima una gran disposición de fondo.

Evidentemente, dado que nuestra legislación escolar establece que cada provincia fijará su edad escolar, el proyecto se refiere a la edad que determine la respectiva provincia; tanto más que todas estas leyes reglamentarias del trabajo pueden ser, a su vez, objeto de reglamentación provinciales complementarias para su aplicación.

Esta prescripción se refiere al distrito federal, a los territorios nacionales y a las provincias que tienen una edad escolar superior a la de doce años. En ellas la prohibición es más amplia.

Es inaceptable rechazar todo este artículo por ese microscópico detalle de forma...

Sr. Sánchez Elía. — No le resulta microscópico el señor diputado...

Sr. Bunge. — El artículo tiene un alcance social importantísimo, el de prohibir el trabajo de todos los niños que no han cumplido el mínimo de la instrucción escolar, o que aun, habiéndolo cumplido, no han llegado a los doce años.

Es esa gran disposición la que establece el artículo y la que la comisión propone que la cámara vote sin más discusión.

Sr. Sánchez Elía. — Yo le preguntaría al diputado si no resultaría también microscópico este artículo en virtud de que solamente en algunas de las provincias va a regir para un año de diferencia de edad.

Sr. Bunge. — ¿Le parece poco? En ese año los niños crecen a veces diez centímetros.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar el artículo dejando en suspenso las palabras "y servicio doméstico".

Sr. Culaciati. — Pido la palabra.

Antes deseo una aclaración. El artículo autoriza a los defensores de menores a conceder autorizaciones en casos determinados. Necesito que se me aclare si esta autorización es definitiva o semanal, porque según el artículo parece ser semanal.

Sr. Bunge. — Es definitiva, bajo la condición de que semanalmente el autorizado presente al patrón el certificado; de manera que el patrón que ocupa a un menor autorizado sin que ese menor haya presentado cada semana el certificado, infringe la ley.

Sr. Culaciati. — Pero si trabaja no puede presentar el certificado.

Sr. Bunge. — Cómo no; automáticamente se establece la media jornada. El artículo autoriza solamente, por la exigencia que establece, los trabajos livianos de media jornada, fuera de las horas escolares.

Las leyes no pueden ser explicativas: sólo establecen la norma imperativa.

Sr. Culaciati. — Pero tienen que ser claras; y el artículo no es claro. Basta leerlo para comprender que mi duda es justificada. Las leyes tienen que ser claras, porque son para todos los habitantes de la república. Será muy claro el artículo para el señor diputado, pero no para los que deben aplicarlo.

Sr. Anastasi. — ¿Pero qué desea aclarar el señor diputado?

Sr. Culaciati. — Según el artículo, el defensor de menores en ciertos casos puede autorizar a los menores para trabajar. Yo necesito saber si esa autorización es semanal o definitiva. Si la autorización se hace a base de los certificados que deben ser expedidos por las escuelas respectivas, significa que el menor trabajará una semana y otra no. Esto es lo que parece desprenderse del artículo. Léalo el señor diputado.

Sr. Anastasi. — El artículo es claro, y si no lo fuera, bastarían las aclaraciones del miembro informante, que sirven para interpretar la ley.

Sr. Culaciati. — No es claro.

Sr. Anastasi. — El artículo dice que el ministerio de menores podrá autori-

zar el trabajo de éstos cuando lo considere indispensable para la subsistencia de los mismos o de sus padres o de sus padres o hermanos, bajo la condición de que presenten cada semana que trabajen un certificado firmado por el director de la respectiva escuela, en el que conste que han concurrido regularmente a clase durante la semana precedente.

Sr. Culaciati. — Quiere decir que trabaja una semana y la otra va a la escuela.

Sr. Anastasi. — Entonces no cumpliría con la obligación escolar. La comisión ha tenido en cuenta las tareas livianas, que no impiden la concurrencia a la escuela.

Sr. Cardarelli. — Los menores tendrán, entonces, todas las semanas que ir al ministerio de menores para acreditar que cumplen con sus obligaciones escolares, con lo cual tendremos a dicho ministerio atendiendo a diez mil personas.

Sr. Ortíz. — Es el dueño de la fábrica.

Sr. Cardarelli. — No, señor diputado: es el director de la fábrica, el patrón que lo contrató, que tiene la obligación de exigir el certificado.

Sr. Culaciati. — ¿Qué certificado? ¿De qué?

Sr. Ortíz. — Hay escuelas diurnas, de mañana y de tarde, o nocturnas.

Sr. Culaciati. — No es eso lo que resulta.

Es una inferencia lógica que el menor está autorizado a trabajar una semana y la semana siguiente tiene que concurrir a la escuela. Es lo que resulta evidentemente del artículo.

Sr. Anastasi. — Entonces, para terminar con la incidencia del señor diputado, porque el señor diputado no propone nada en concreto, sino que pide una aclaración, la comisión...

Sr. Parry. — Voy a proponer una pequeña modificación, por si la comisión la considera aceptable, que sería: suprimir "cada semana que trabaje" y poner "semanalmente", y luego el artículo como está.

Sr. Anastasi. — No habría inconveniente.

Sr. Parry. — Quedaría en esta forma: "Bajo la condición de que semanalmente presente un certificado firmado por el director de la respectiva escuela, en el que conste que ha concurrido regularmente a las clases de la semana anterior".

Sr. Cardarelli. — ¿Ante quién debe ser presentado?

Sr. Parry. — Ante el patrón.

Sr. Cardarelli. — ¿Y cuál es la sanción?

Sr. Bunge. — Ya está, señor diputado, porque hay un artículo que establece que estos certificados serán archivados a disposición de los inspectores.

Sr. Anastasi. — Eso es materia de disposiciones penales.

Sr. Culaciatti. — Yo creo que quedaría claro en la siguiente forma: que se autorice el ejercicio del trabajo hasta que cese la causa que provoca esa autorización, y suprimir la parte del certificado.

Sr. Anastasi. — Si el señor diputado por Buenos Aires propone concretamente esa redacción, la comisión no tiene inconveniente en aceptar.

Sr. Bunge. — Advierto al señor diputado que eso no tiene objeto porque "cada semana" es mucho más imperativo, más claro. Cuando la comisión ha redactado este artículo que está tomado del proyecto socialista, ha entendido lo siguiente: que los niños autorizados a título excepcional a trabajar, no pueden ser ocupados por empleador alguno al comenzar la semana, digamos el día lunes, sin que presenten el certificado de haber asistido a la escuela durante la semana anterior. A su vez, el otro lunes tendrán que presentar el certificado de haber asistido a la escuela durante la semana anterior.

Sr. Culaciatti. — Porque el propósito de este artículo debe coordinarse...

Sr. Bunge. — Le agradecería al señor diputado no me interrumpa antes de que explique mi pensamiento.

Sr. Culaciatti. — Muy bien.

Sr. Bunge. — El propósito de este artículo es conseguir que no trabaje ningún niño sin cumplir el mínimo legal de instrucción escolar. Esta disposición autoriza a trabajar a ciertos niños que todavía no han cumplido aquel mínimo legal de instrucción escolar, y sólo lo autoriza bajo la condición de que sigan concurriendo a la escuela, y esa condición debe verificarla el propio patrón; si no lo hace, es responsable de infracción a la ley. Quiere decir que esta disposición prohíbe ocupar a niños que no han cumplido el mínimo escolar y que no asisten a la escuela, y lo establece en una forma tal que es facilísimo verificarlo automáticamente, exigiendo el certificado semanal de concurrencia escolar. En uno de los artículos de aplicación, que puede ver el señor diputado, en el artículo 40., se prescribe que esos certificados queden archivados y clasificados.

Sr. Culaciatti. — Lo que no me explica, señor diputado, es la concurrencia al trabajo y a la escuela.

Sr. Bunge. — Pero es muy fácil de explicar: puede concurrir a la escuela de 8 a 12 de la mañana y trabajar de 2 a 6 de la tarde, ó ir a la escuela de 2 a 6 de la tarde y trabajar por la mañana; puede concurrir a la escuela durante el horario escolar de su localidad, y antes trabajar una o dos horas como repartidor, como vendedor de diarios, si tiene edad, o en trabajos rurales; puede trabajar en la chacra de sus padres, por ejemplo. El padre no puede ocupar a su propio hijo, de acuerdo con esta disposición, si ese niño no asiste a la escuela, y el señor diputado, que es representante de una provincia agrícola, ha de saber que en la campaña de Santa Fe, como en la de Buenos Aires y en todas partes, una de las grandes dificultades que encuentran los maestros para conseguir la asistencia regular de los niños a la escuela son las tareas rurales.

Con esta disposición del certificado escolar, entonces, se garantiza que el trabajo sólo será aceptable en la medida que él no sea incompatible con la instrucción escolar. Se lo garantiza en una forma práctica, con eficacia, y ha

sido comprobado por ejemplo, en Inglaterra, donde se le autoriza para trabajar en la industria y comercio, que nuestro proyecto prohíbe, y en jornadas excesivas. En la forma de trabajo que nuestro proyecto autoriza en la práctica, sólo van a sus posibles tareas de ocasión o de media jornada muy liviana y en tareas rurales solamente, porque como vendedor callejero, como empleado de comercio o de la industria, como doméstico, ningún niño podrá trabajar.

Serán, pues, principalmente las tareas rurales, que en general se cumplen como miembros de la familia propia o de otra familia, las que autoriza a título excepcional este artículo. Es una disposición de excepción que será aplicable a pocos casos.

Sr. Culaciati. — No me convence la argumentación del señor diputado.

Se trata aquí de una ley realmente de protección al trabajo de los menores y no me explico que una ley de esta naturaleza no contemple el hecho de que esas dos exigencias vienen a estar en contra del mismo menor. Por un lado la ley faculta para el trabajo y por el otro lado establece la obligación de concurrir a la escuela. Me parece que es una exigencia que es necesario atenuar, y la forma de hacerlo sería fijar períodos, autorizando al menor para que trabaje en esos casos excepcionales por períodos, y no en la época en que tiene obligación de concurrir a la escuela.

Sr. Bunge. — Puede hacerlo a su elección. La ley le deja plena amplitud a ese respecto. En cambio, como lo propone el señor diputado, podría asistir al trabajo sin asistir a la escuela.

Sr. Culaciati. — Se puede fijar períodos.

Sr. Bunge. — Lo que propone el señor diputado es de hecho la derogación, en perjuicio de estos niños, de la obligación escolar de la constitución y de nuestras leyes.

Sr. Culaciati. — Lo que hay que hacer es librar a los menores de esa doble exigencia que no consigo explicar al señor diputado.

Sr. Bunge. — Lo hemos entendido demasiado al señor diputado. El señor diputado no quiere que sean obligados a asistir a la escuela los menores de catorce años que no hayan cumplido la instrucción escolar.

Sr. Culaciati. — No le he oído al señor diputado.

Sr. Cardarelli. — Pido la palabra.

En realidad, señor presidente, lo que correspondería hacer para evitar discusiones es suprimir la última parte del artículo.

No soy de los que creen que se debe eliminar la obligación de la asistencia a las escuelas, pero los mismos miembros de la comisión autorizan a trabajar a los menores de doce años en este caso excepcional en que atiendan a su subsistencia, la de sus padres o la de sus hermanos. Ahora, pongamos en frente las dos obligaciones, la de vivir o ayudar a vivir, con la de concurrir a la escuela, y encontrarán los señores diputados que, en ningún caso, por el hecho de obligar a concurrir a la escuela a un menor se le puede condenar de muerte a él o a los suyos, a cuya subsistencia atiende. Porque del punto de vista de la protección a los menores no hay que olvidar el estado real en que se encuentran esas familias a que pertenecen esos menores que no van a la escuela. Es una aspiración general de los padres instruir a sus hijos; pero no todos pueden hacerlo; la concurrencia a la escuela demanda gastos, erogaciones, pocas o muchas. Entonces, si la excepción es para los niños que atienden a su subsistencia o a la de sus padres o hermanos, creo que ante esta suprema razón puede suprimirse la obligación educacional.

Varios señores diputados. — ¡No, no!

Sr. Cardarelli. — Perfectamente, señores diputados. No será ese su concepto; pero yo estoy expresando el mío. Quiero dejar constancia de él; y por eso propongo — y así votaré el artículo — que se le suprima la última parte, desde donde dice “hermanos”, palabra en la cual debe quedar el punto final del artículo.

Sr. Bunge. — Hay que agradecerle al señor diputado que haya expresado con claridad el pensamiento del otro señor diputado, que es éste: que se suprima la obligación escolar para los menores de catorce años.

Sr. Cardarelli. — Que no tienen con qué ir a la escuela ni con qué comer y que se morirán de hambre.

Sr. Dickmann (A.) — El estado o la comuna deben subvenir a su subsistencia.

Sr. Bunge. — Hay obligación de asistir a esos menores.

Sr. Culaciati. — No es ese mi pensamiento, señor diputado. Mi pensamiento es que no se establezca para los menores dos obligaciones: la de trabajar y la de concurrir a la escuela, porque es imposible que un menor pueda cumplirlas.

Sr. Bunge. — Que concurren a las escuelas y que los asistan las comunas.

Sr. Culaciati. — Que se fije un período para el trabajo y otro para la educación; que no sean simultáneas esas obligaciones, porque entonces será imposible cumplirlas. No puede admitirse una ley de protección a los menores con mil obligaciones para éstos.

Sr. Astrada. — Pido la palabra.

Encuentro, señor presidente, que la parte final del primer párrafo del artículo 1º. contraría fundamentalmente los propósitos de protección a la niñez que persigue el proyecto en general. Desde el momento que establece la prohibición del servicio doméstico para los menores, se les pone a esos menores en condiciones para ellos perjudiciales, y ella no puede responder a esos propósitos de la ley, como es de cooperar a la subsistencia de los padres y al mismo tiempo el que se encuentren en condiciones de recibir el mínimo de la instrucción primaria que las leyes de la provincia establecen en general.

Es sabido, y es necesario tener un poco de conocimiento de lo que es la vida familiar en las provincias — no conozco la de esta capital — que allí la mayor parte de las familias tienen en sus casas niños que están comprendidos dentro de esta edad y que no

persiguen el propósito de explotar el trabajo de los menores, sino de contribuir, por razones de humanidad más bien, a la formación del carácter de esos niños por una educación que se desarrolla al mismo tiempo en el hogar y en la escuela pública. Esto lo saben muy bien todos los señores diputados de provincia.

Con esa prohibición, esas familias se encontrarán en la imposibilidad de seguir prestando ese concurso porque a nadie le gusta contravenir las disposiciones expresas de la ley y con ello resultará perjudicada la educación pública y sobre todo la educación individual de esos niños.

Si esta disposición se suprimiese, me parece que la ley estaría más encuadrada dentro del propósito general que se persigue. Yo me explico la prohibición del trabajo de los menores en las fábricas y talleres y parajes públicos o de comercio porque puede perseguirse el propósito de la explotación de los menores, pero no en el servicio doméstico en que, como digo, las familias toman como hijos, más bien, a esta clase de menores para ocupar una parte de sus actividades en un servicio moderado y que no perjudica ni contraría en absoluto el desarrollo físico ni intelectual de los niños.

Si este es el propósito de la comisión, como me lo acaba de manifestar uno de sus miembros, el señor diputado Cafferata, yo pediría que se supriman esas dos palabras: "servicio doméstico" y así, en mi concepto, quedaría mejor consultado el propósito de la ley.

Sr. Anastasi. — ¿Qué palabras pide el señor diputado que se supriman?

Sr. Astrada. — "Servicio doméstico."

Sr. Bunge. — Aquí se van a suprimir.

Sr. Anastasi. — ¿El señor diputado por Córdoba propone la supresión de las palabras: "servicio doméstico."

Sr. Astrada. — Sí, señor diputado.

Sr. Anastasi. — Ya están suprimidas.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — No, señor diputado. Están suspendidas para ser pasadas al artículo 2º. Por

eso desco aclarar que la información que le dan al señor diputado no es la que ha recogido la secretaría.

Sr. Bunge. — Si la cámara rechaza la exclusión de las palabras "servicio doméstico" en el artículo 2o., quedarían incorporadas al artículo 1o., por que sería lamentable que los niños que trabajan en el servicio doméstico quedaran excluidos de los beneficios de esta ley; por esa razón yo propuse que se votara tal cual está y propongo a la comisión, debido a esta objeción que se hace, que se vote tal cual está; y en caso que la cámara al votarse el artículo 2o. aprobara la inclusión del servicio doméstico, serían eliminadas por secretaría esas palabras "servicio doméstico" en el artículo 1o. Corremos el riesgo de que los niños ocupados en el servicio doméstico no gocen de los beneficios de esta ley.

Sr. Astrada. — Esa es, precisamente, la diferencia de concepto que tenemos con el señor diputado. El señor diputado cree que la ley ha hace un beneficio al incluir la prohibición del servicio doméstico.

Sr. Bunge. — No he oído bien las primeras palabras del señor diputado porque las dijo en voz baja, pero me parece que se ha referido, no propiamente a los niños ocupados en el servicio doméstico, sino a los niños que viven como allegados en una casa y que prestan servicios en ella ocasionalmente.

Sr. Astrada. — Y que en realidad son ocupados en el servicio doméstico, educados y formados en el mismo hogar, pero por la prestación de esos servicios reciben una remuneración.

Esta es la forma ordinaria de la vida de provincias, y como estas leyes se dictan para toda la república, la prohibición se establecería para esos casos, que en mi concepto forman la generalidad de la vida argentina.

Sr. Bunge. — Como la objeción que acaba de hacer el señor diputado demuestra que corre peligro hasta una prohibición de ocupar en el servicio doméstico a los menores de doce años, evidentemente esa prohibición correría ma-

yor peligro al figurar en el artículo 2o. Por eso insiste la comisión en que se vote el artículo 1o. tal como está, con las palabras "servicio doméstico", y al votarse el artículo 2o., se vote aparte el agregado que la comisión ha aceptado; si este agregado se acepta por la cámara, la secretaría eliminará esas mismas palabras del artículo 1o.

Sr. Rodríguez (J. R.) — Pido la palabra.

Yo creo que la comisión de legislación del trabajo estuvo acertada cuando aceptó incorporar al artículo 2o. de su despacho la proposición del diputado por Buenos Aires, señor Verduga, y que va en cambio a prestarse a confusiones la indicación que acaba de formular el señor diputado Bunge, si se le diera curso en la forma por él propuesta. No es reglamentaria esta forma de votaciones condicionales. La comisión debe presentar en forma definitiva uno u otro de los despachos: o el primero que está impreso, o aquel, a mi juicio mejor, que resultó modificado al aceptar la comisión la indicación del señor diputado por Buenos Aires, que elevaba a catorce años el mínimum de edad de los menores para prestar servicio doméstico.

Los diputados que estemos de acuerdo en que no se ocupe en el servicio doméstico a menores que no tengan catorce años de edad, votaremos con gusto el artículo 2o. con el agregado aceptado por la comisión y que forma parte ya de su despacho; y los diputados que estén de acuerdo con la forma primitiva, tendrán un expediente muy fácil para resolver su situación, pidiendo que se vote como un agregado del artículo primero.

Me permito hacer esta indicación, porque tengo alguna experiencia de lo que ocurre cuando se trata de asuntos como este, que no han sido examinados con detención por haberse impreso recientemente en la orden del día.

Sr. Anastasi. — La comisión acepta la forma propuesta por el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rodríguez (J. R.) — Y con respecto al otro punto debatido hace un

momento, de la exigencia para los menores de catorce años que no tuvieran cumplidas las condiciones escolares suficientes, me parece que la discusión se ha desviado un poco de su cauce natural, por una confusión propia de la forma en que se ha debatido el asunto.

La disposición contenida en el último párrafo del artículo 10., que autorizaba al ministerio de menores a facultar a los niños entre doce y catorce años que no hubieran cumplido las condiciones escolares recibiendo el mínimo de instrucción obligatoria, a trabajar, siempre que presentaran un certificado de instrucción, alternada semanalmente con el trabajo, está, a mi juicio mal redactada. Si la comisión ha aceptado que pasen los menores de doce a catorce años de edad que trabajaran en las labores agrícolas, porque el artículo 10. no comprende ya a ningún otro menor que no sean esos; todos los demás, los empleados en servicio doméstico, los empleados en establecimientos comerciales o industriales, están comprendidos en el artículo 20. y como no pueden emplearse antes de los catorce años, ya habrán cumplido estos el mínimo de instrucción obligatoria.

Sr. Bunge. — ¿Me permite?

Sr. Rodríguez (J. R.) — Déjeme terminar el señor diputado porque estoy tratando de aclarar una confusión. Si el señor diputado me interrumpe y yo le conté, se va a complicar más este asunto, que debemos simplificar.

Sr. Bunge. — Quería decirle simplemente al señor diputado que hay muchas otras formas de ocupación y que no son sólo los trabajos agrícolas; estaría comprendida, por ejemplo, la de los repartidores, los mandaderos, los mensajeros rurales, etcétera, que podrían trabajar en esas condiciones. No son sólo, pues, los empleados en servicio doméstico; hay además muchas otras formas de ocupaciones accesorias que son las más compatibles con la reglamentación.

Sr. Rodríguez (J. R.) — Sería siempre un número mínimo, verdaderamente insignificante.

Sr. Bunge. — Eso sí.

Sr. Rodríguez (J. R.) — La gran mayoría de los niños hasta los catorce años trabajan en el comercio, en las industrias o en el servicio doméstico: es insignificante la proporción a que quedarían reducidos los comprendidos en el artículo 10. Me parece entonces que la comisión de legislación del trabajo, que debe ser la más interesada en que su despacho tenga pronta y favorable sanción de la cámara, no debe resistirse heroicamente en todos los casos a aceptar algunas modificaciones a su texto siempre que conduzcan a aclararlo y a perfeccionar la ley.

Desde mi punto de vista, le sugiero la conveniencia de mantener el artículo 20. tal cual lo había aceptado al principio y no como ahora lo ha propuesto el señor diputado Bunge; y aceptar para la última parte de ese artículo 10. una redacción que se podría proponer inmediatamente que simplificara su sentido y evitara que él se preste a confusiones perjudiciales.

El señor diputado por Santa Fe doctor Culaciati hacía una observación que tal vez no haya sido bien entendida por el señor miembro informante en su oportunidad. Manifestaba el señor diputado que le parecía extraordinaria la exigencia simultánea de llenar las condiciones de un mínimo de educación escolar y autorizar al niño al mismo tiempo para trabajar. El señor diputado piensa — y yo creo que con bastante razón — que no pueden hacerse las dos cosas al mismo tiempo sino en muy contados casos, pero nunca alternando semanalmente el trabajo y la instrucción escolar.

Tal vez convenga, pues, que no sea demasiado detallista la redacción de esa última parte del artículo 10. porque se crearían dificultades mayores para aplicarlo con éxito. Sería suficiente con decir que queda autorizado el ministerio de menores para facultar a los de doce a catorce años comprendidos en este artículo 10. a trabajar, siempre que llenaran en forma satisfactoria, sin determinar si es alternada, semanalmente, nocturna o por períodos la educación, siempre que se le llenara.

en forma suficiente un *mínimum* de instrucción. De esa manera se habría satisfecho la exigencia justificada de algunos señores diputados que formulan observaciones al despacho de la comisión y ésta salvaría íntegramente su propósito fundamental en este artículo, con la nueva redacción que yo propongo.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

Parece que se trata ya de votar el artículo, porque está agotado el debate y estas consideraciones se refieren a la forma de votar. La comisión propone entonces en el primer apartado del artículo 1o. toda la redacción propuesta hasta la palabra "rurales", de manera que no se votaría "y el servicio doméstico" en ese artículo. "El servicio doméstico" se votaría en el artículo 2o. donde formaría parte el despacho de la comisión.

Los señores diputados que entienden que la expresión "y el servicio doméstico" debe quedar, no tienen más que proponer el agregado, y la sanción de ese agregado haría caducar desde luego el despacho de la comisión en esa parte del artículo 2o.

En cuanto a la segunda parte, la mejor manera de entenderse sería votar por partes. Es un poco difícil satisfacer todos los pedidos; en esta materia de redacción de leyes, por más buena voluntad que se tenga, salen mal redactadas en una discusión parlamentaria. Y para subsanar la falta, entre nosotros, de una comisión de redacción, se me ocurre que los señores diputados que participan de las ideas expuestas por los señores diputados por Santa Fe pueden proponer, por ejemplo, una votación por partes: primero hasta la palabra "obligatoria", y después: "Sin embargo, el ministerio de menores podrá autorizar el trabajo de los menores siempre que se cumpla la obligación escolar."

Es la forma más conveniente, y no hay otra manera de resolver el conflicto sino por medio de una votación parcial.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Ruego al señor diputado Anastasi indique en qué condiciones debe votarse.

Sr. Anastasi. — Parece que hay asentimiento sobre esta forma: votar el artículo 1o., hasta las palabras "trabajos rurales" inclusive. Quiere decir que quien vota el despacho de la comisión entiende que el servicio doméstico va a formar parte del artículo 2o.; es decir, que va a requerir el *mínimum* de catorce años.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar la primera parte del artículo 1o. hasta la palabra "rurales" inclusive.

—Resulta afirmativa.

Sr. Ceballos (M. P.)—Propongo que el segundo apartado se vote hasta la palabra "obligatoria."

Sr. Anastasi.—No hay inconveniente.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar la segunda parte del artículo 1o. hasta la palabra "obligatoria" inclusive.

—Resulta afirmativa.

Sr. Rodríguez (J. R.) — Voy a proponer ahora, en substitución del despacho de la comisión para el caso de que fuera rechazado, una nueva forma de redacción que consulta las distintas opiniones de algunos señores diputados: "Sin embargo, el ministerio de menores respectivo podrá autorizar el trabajo de éstos cuando lo considere indispensable para la subsistencia de los mismos o de sus padres y hermanos, a condición de que sea llenado en forma satisfactoria, a su juicio, el *mínimum* de instrucción exigido por la ley."

Sr. Bunge. — Propondría al señor diputado la supresión de las palabras "a juicio" y voy a dar con toda lealtad la razón: para que no quede confiada la condición al juicio del ministerio de menores, que no puede verificarla, sino a juicio de la autoridad de aplicación de la ley que exista localmente.

El ministerio de menores no puede materialmente controlar la asistencia escolar. Lo único que puede hacer...

Sr. Rodríguez (J. R.). — Si se le da la facultad de autorizar, es evidentemente él quien debe juzgar.

Sr. Bunge. — La facultad se le da a condición de que se cumpla la ley. Y es la autoridad local de aplicación lo que debe verificar es si la ley se cumple o no. No podemos hacer de los fiscales de menores inspectores gratuitos de la ley. Tengo la impresión de que en esa forma, suprimiendo las palabras "a su juicio", la comisión aceptaría la proposición del señor diputado.

Sr. Rodríguez (J. R.). — Como le da al fiscal de menores la facultad de autorizar el trabajo, es evidente que debe quedar a juicio de él si las condiciones están llenadas.

Sr. Anastasi. — No, señor diputado. Al ministerio se le impone la obligación de que exija el cumplimiento del minimum de enseñanza escolar. Ese cumplimiento lo testimonian las respectivas escuelas con el certificado conveniente. Por lo demás, la comisión no tendría inconveniente en aceptar el agregado del señor diputado, quitándole ese aspecto subjetivo, quitando la palabra "a su juicio".

Sr. Rodríguez (J. R.). — Perfectamente, que se supriman esas palabras.

Sr. Ceballos (M. P.). — Pido la palabra.

Me parece bien la forma propuesta por el diputado por Santa Fe señor Rodríguez. La disposición, tal como está redactada por la comisión puede aplicarse en las ciudades, pero tropezaría con grandes dificultades en las provincias y especialmente en la campaña donde no existe ministerio de menores.

De manera que yo estoy de acuerdo con que se encargue de esa función al defensor de menores; pero que se suprima la última parte, es decir, la comprobación de la asistencia semanal a clase, con lo cual se salvarían los inconvenientes que entraña la forma redactada por la comisión.

No es posible implantar en la campaña la exigencia de que el que ocupe un menor exhiba semanalmente ante el

ministerio de menores un certificado del director de escuela. Bastaría con dejar a juicio del defensor de menores quien podría exigirlo semanalmente o cada quince días, según lo seasos.

Sr. Dickmann (E.). — Pido la palabra.

Sr. Anastasi. — ¿Si me permite?...

Hago presente que la comisión está dispuesta a aceptar la redacción que propone el señor diputado por Santa Fe, es decir, bajo condición de que se llene en forma satisfactoria el minimum de instrucción obligatoria.

Varios señores diputados. — Eso es.

Sr. Anastasi. — Así formaría parte del despacho.

Sr. Gallardo. — Pido la palabra.

Quería hacer presente que en las localidades donde no hay ministerio de menores podría llenar esta función el juez de paz.

Sr. Anastasi. — Por más que no hemos oído bien al señor diputado por Santiago del Estero, suponemos que desea que se reemplace la expresión "ministerio de menores" por "autoridad local".

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — No, señor diputado.

Sr. Anastasi. — En realidad, se trata de una cuestión de términos.

Sr. Ortiz. — Si hay autoridades judiciales locales, hay un asesor de menores.

Sr. Anastasi. — Lo que se quiere evitar es un pleito con motivo del trabajo de los menores; por eso no ha querido conferirse a la autoridad judicial la tarea de otorgar los permisos, basta un vecino cualquiera que sea investido con la facultad por la ley local, para que se llenen los propósitos del legislador. Al decir "ministerio de menores" se ha entendido referirse a la autoridad que dentro del orden local tenga a su cuidado los menores. Generalmente, en los partidos de campaña, como en la provincia de Buenos Aires, hay un juzgado de paz cuyo juez es un asesor de menores...

Sr. Gallardo. — En nuestra campaña no hay defensor de menores.

Sr. Anastasi. — Donde no hay deben crearse, porque los menores no pueden quedar desamparados.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Tiene la palabra el señor diputado por la capital.

Sr. Dickmann (E.) — Si la comisión acepta la redacción del señor diputado por Santa Fe, no tengo nada que decir.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Rodeyro. — Se ha cerrado el debate: que se vote.

Sr. Cardarelli. — No, señor diputado...

Sr. Gallardo. — Podría ponerse: la autoridad escolar respectiva. En todas las localidades donde hay una escuela hay autoridad escolar.

Sr. Anastasi. — Al referirse la comisión al ministerio de menores ha entendido aludir a la autoridad local que tenga el patrocinio de los menores, sea cual fuere. Son detalles de procedimiento que, estos sí, corresponden a las provincias.

Sr. Aragón. — Convendría aclarar cuál de las autoridades...

Sr. Antile. — Se podría agregar estas palabras: "...el ministerio de menores o su representante legal". El representante legal es en todas las provincias el juez de paz de campaña.

Sr. Anastasi. — La comisión mantiene su despacho porque con las aclaraciones hechas entiende que satisface los propósitos de todos los señores diputados que han propuesto cambios de redacción.

Sr. Maidana. — Pido la palabra.

Si se pusiera el artículo como está vendrían a dejarse casi sin efecto los fines que se han tenido en vista en esta segunda parte del artículo que se discute.

En primer lugar, en muchas de las provincias no hay representantes del ministerio de menores, sino en la ciudades, cabeza de circunscripciones judiciales; como ocurre en la provincia de Córdoba, donde no hay más que seis circunscripciones. De tal manera que si se mantuviera el artículo como está, los menores tendrían que recorrer se-

venta o setenta leguas para sacar la autorización indispensable para trabajar, lo que haría imposible cumplir la ley.

Por ello creo que la comisión podría aceptar reformar esta parte del artículo en estos términos: "*Sin embargo el ministerio de menores... o defensor de menores, donde lo hubiere, o en su defecto la autoridad judicial o policial más inmediatas*".

En esta forma podrá llevarse a efecto la ley, porque no se puede establecer, como lo propone algún señor diputado, que sean los representantes del ministerio de menores, porque por la organización judicial de las provincias, como ocurre en la mía, el ministerio de menores no está organizado ni fiscalizado en todas las poblaciones, ni los pocos organizados que existen pueden delegar sus funciones, que no son delegables.

Desearía que la comisión manifestara si acepta mi proposición, tendiente a facilitar el cumplimiento de la ley, sin mayores inconvenientes para el menor que necesita la autorización para poder trabajar, como al patrón que lo ocupa.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

La comisión vuelve a repetir que esta materia de organización judicial está reservada a las provincias. La comisión ha tomado un término genérico, que ha visto en el código civil, pues éste dice a cada rato "ministerio de menores", y sin embargo no ha tenido en mira prescribir tal o cual funcionario.

Repito que la comisión cree que los señores diputados van a ver satisfechos sus propósitos votando una disposición genérica, cuya determinación precisa corresponderá a la autoridad local, porque ellas es la que aplicará la ley.

Sr. Quinteros. — Pido la palabra.

Sr. Rodeyro. — Pido la palabra para una moción previa: la de cerrar el debate.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — El señor diputado ha pedido tres veces la palabra.

Sr. Rodeyro. — Pero yo había hecho ya moción de cerrar el debate.

Sr. Bunge. — Desearía advertir que este artículo no se propone facilitar el

trabajo de los menores sino dificultarlo.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Hay una moción de orden, que se va a votar.

Sr. Cardarelli. — No es posible cerrar el debate porque estamos discutiendo lo fundamental de la ley.

Sr. Ceballos (M. P.) — Y se ha pedido la palabra.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar la moción de cerrar el debate, que es previa...

Sr. Rodeyro. — La retiro.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Tiene la palabra el señor diputado Quinteros.

Sr. Quinteros. — La había pedido para la misma moción de cerrar el debate y de que se vote con la modificación propuesta por el señor diputado.

Sr. Texier. — Pido la palabra.

Creo que la proposición del señor diputado por Santa Fe llena satisfactoriamente los propósitos de la ley, y estos propósitos son: que el menor que tenga necesidad de trabajar pueda hacerlo siempre que reciba el mínimo de instrucción primaria a que está obligado por las leyes. Esto queda librado a las reglamentaciones que deberán hacer las provincias.

Se sabe que el ministerio de menores, instituido por el código civil, tiene bajo su amparo a todos los menores y no permitirá que en el afán de que un menor trabaje se descuide su instrucción primaria. Tratará, por todos los medios a su alcance, que no sea burlada la disposición de la ley, que exige que el menor reciba tan siquiera ese mínimo de instrucción.

Yo creo que en esa forma se llenan cumplidamente los fines de la ley. Es ésta, pues, la única forma en que puede votarse, porque resulta aclarado el concepto de la ley.

Sr. Cardarelli. — Pido la palabra.

Para hacer una pregunta a la comisión, pues noto que hay un absurdo. ¿Qué sanción existe contra el menor a quien se le obliga a instruirse para poder trabajar? No me refiero a sanción contra el patrón, ni contra el padre o guardador. Si el menor no acredita

haberse instruido o que se está instruyendo, se le priva del derecho de trabajar en el caso excepcional que contempla la ley, de ser indispensable para su subsistencia o a la de su padre o hermano. En una palabra, se le condena a muerte al menor y a su familia, porque de otro modo deberíamos llevarle la acción del estado. ¿Dónde está la caja del estado, que va a llenar las necesidades elementales del menor y de su familia?

Si la comisión me dice cuál es la solución yo votaré el artículo.

Sr. Quinteros. — ¡Pero, señor diputado, de menores de doce años no vive ninguna familia! ¡Es un absurdo! (Risas).

Sr. Cardarelli. — ¡Ese es un craso error suyo, señor diputado!

Sr. Rodríguez (J. R.) — Pido la palabra.

El señor presidente de la comisión, doctor Anastasi, ha dicho con toda claridad cuál es el concepto que ha tenido la comisión, primero, y el diputado que habla, después, para proponer esta forma de redacción a la última parte del artículo 1º.

Se ha empleado el término genérico "ministerio de menores", en el cual están comprendidos los auxiliares del mismo, que son en su caso los jueces de paz de campaña, donde no exista el defensor de menores titular.

No es el caso de entrar en detalles de esta naturaleza en la redacción de la ley.

El señor diputado por Santa Fe, doctor Antille, proponía: "el ministerio de menores o su representante legal". El ministerio de menores no puede tenerlo, ni puede delegar funciones de esa naturaleza. Las respectivas reglamentaciones provinciales podrán conferir funciones análogas a las de los defensores de menores, a sus jueces de paz, ya sea por leyes de sus legislaturas o por decretos del poder ejecutivo local.

Me parece, entonces, que la forma que he propuesto y que la comisión ha aceptado, es lo que debe votarse, porque se han salvado así las dificultades que algunos diputados señalaron en

beneficio de la ley, que resultará más clara en sus disposiciones de excepción, asegurando su completa eficacia.

Sr. Anastasi. — Para que no quede sin respuesta el señor diputado Cardarelli, le observo que le ha respondido muy bien el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cardarelli. — Esa contestación es admisible de donde procede, pero el señor diputado no puede darla. Hay muchas familias que viven del auxilio de un menor, y hay muchos menores que no viven en el seno de su familia.

Sr. Quinteros. — Lo que quiere la ley es que vivan de otro medio que no sea el trabajo del menor.

Sr. Cardarelli. — Estamos presentando leyes de represión de la mendicidad, porque hay padres que mandan a sus hijos menores a mendigar, y ahora con ésta ley se les prohíbe ganar su subsistencia.

Sr. Quinteros. — Los padres que mandan a sus hijos menores por las calles, prostituyéndolos, haciéndolos vender diarios hasta altas horas de la noche, que busquen otros medios más honestos que esos, o que se mueran de hambre. (*Risas*).

Sr. Anastasi. — Cuando la casuística de los abogados ahoga, es necesario refrescar el ambiente con las impresiones de sentido común de las personas que no son abogados.

El señor diputado por Córdoba ha dicho muy bien que no es admisible que en nuestra república una familia viva del trabajo de un menor de doce años, con un salario insignificante de cincuenta o de un peso diario. Y si existe esa familia, si es una familia de incapaces que viven como zánganos del trabajo de ese menor, que busque otro medio de subsistencia.

Los argumentos del señor diputado por Santa Fe son exactamente los mismos que se han opuesto a la reglamentación del trabajo de los menores, y de la misma naturaleza de los invocados cuando se trataba de abolir la esclavitud de los negros. Han cambiado los motivos de los argumentos, pero en el fondo son los mismos.

Por eso la comisión insiste en su primitivo despacho, y propone la redacción que ha dado con el agregado propuesto por el diputado por Santa Fe, señor Rodríguez...

Sr. Cardarelli. — Pero antes la comisión había aceptado que fueran hermanos. ¿Por qué modifica su despacho?

Sr. Anastasi. — Porque ha entendido que ello no altera el fin de la ley.

Sr. Cardarelli. — Propongo que se vote por partes; siendo la primera parte hasta la palabra "hermanos".

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar desde las palabras "sin embargo" hasta la palabra "hermanos".

—Se lee:

"Sin embargo el ministerio de menores respectivo podrá autorizar el trabajo de éstos cuando lo considere indispensable para la subsistencia de los mismos, o de sus padres o hermanos."

Sr. Maidana. — Voy a votar en contra por las razones que he expresado.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar la parte que se ha leído.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Corresponde votar ahora el agregado propuesto por el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rodríguez (J. R.) — Que forma parte del despacho.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Para completar el artículo.

—Se vota: "Siempre que se llene en forma satisfactoria el mínimo de instrucción escolar exigida por la ley", y resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 2°.

Sr. Astrada. — Pido la palabra.

Veó que la comisión mantiene el servicio doméstico entre la prohibición del trabajo de los menores. Yo me voy a permitir hacer una observación que

creo ha de estimar justa. Los defensores de menores dan colocación a todo ese número de menores vagos, que recoge la sociedad con el propósito de substraerlos a la delincuencia y al vicio, de formarlos y de educarlos, y no tiene otro medio, por lo menos hasta el momento en que la ley arbitre otro procedimiento de salvar a estos menores, que la colocación que los defensores hacen de esos niños en ocupaciones de carácter doméstico.

Hay otra fuente, diremos, que produce estos menores: las casas cunas. Llegando a cierto número, las sociedades de beneficencia que sostienen estos establecimientos dan colocación a los menores de cierta edad, ocupándolos en hogares con destino al servicio doméstico. No veo tampoco que la ley provea a esa necesidad, ni las provincias tienen la forma de subvenir a la educación y formación de estos niños. Mantener, entonces, la prohibición, habiéndola incorporado al artículo 2º, donde se establece el límite de catorce años, es todavía una restricción peor. Quiere decir que ya casi hombres, los niños no pueden encontrar ocupación en el servicio doméstico, que les permita, no solamente ayudar al sostenimiento de sus familias, sino tener un empleo que les sirva para su educación y para su propio sostenimiento. De tal manera, entonces, que con el propósito generoso y noble de la ley, de protección a la niñez, se va a dejar en el desamparo y se puede decir que va a arrojar a la vía pública, al arroyo, una gran cantidad de niños que pudieran formarse en hogares honestos, en hogares donde puedan recibir la educación, más que la instrucción primaria, que es el mínimo que garantizan las leyes de las provincias, la educación que es algo más apreciable para el ciudadano que la misma instrucción primaria.

Si la ley propusiera algún procedimiento, algún medio para tomar y substraer de los peligros de la delincuencia a todos estos menores, yo aceptaría esta prohibición; pero cuando veo que la ley no dice una palabra a este efecto, yo insisto, con estas observaciones de carácter general, en la ne-

cesidad de suprimir esta prohibición de ocupar a los niños en el servicio doméstico.

Sr. Rodríguez (J. R.). — Pido la palabra.

La observación del señor diputado por Córdoba tiene un gran fondo de sentido práctico, pero sería doloroso tener que confesar que el estado, cuando tiene a su cargo por la orfandad de esos menores, algunos de ellos, es menos capaz de darles el mínimo de instrucción primaria que establece la ley y proveer a su sostenimiento que cualquier padre de familia, humilde y pobre.

La observación del señor diputado por Córdoba es ésta: aquellos menores que están a cargo de los defensores, por ser huérfanos, y que ordinariamente son colocados para el servicio doméstico en casas de familia que toman a su cargo su educación, asignándoles un pequeño sueldo ¿en qué condiciones quedarán si la ley prohíbe ocupar en el servicio doméstico a todo menor que tenga menos de catorce años? La respuesta no puede ser sino una, señor presidente: el estado tiene por lo menos las mismas obligaciones que los padres de familia modestos. El estado debe educarlos y mantenerlos, y no ponerlos a trabajar en forma contraria al interés social que estamos contemplando, antes que tengan catorce años de edad. Dietemos ahora esta ley que establece una excelente protección de carácter social, y después afrontemos el problema nosotros mismos, al sancionar el presupuesto o con motivo de la discusión de cualquier otro proyecto de ley que la complementa, en los aspectos que ha señalado el señor diputado por Córdoba con muy buen sentido. Sancionaremos entonces las disposiciones de carácter económico necesarias para que el estado atienda la educación y sostenimiento de estos niños hasta que ellos tengan catorce años de edad: pero no confesemos, porque sería doloroso tener que hacerlo, que el estado no se siente capaz de educar y mantener, hasta los catorce años de edad, a los pobres huérfanos que están bajo su custodia. ¡Muy bien! ¡Muy bien!

Sr. Astrada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — La había solicitado el señor diputado Bunge.

Sr. Astrada. — Si me permite, voy a hacerle una observación al señor diputado...

Sr. Bunge. — ¡Cómo no! Así podré contestar en forma más completa.

Sr. Astrada. — No me refiero, simplemente, a la obligación por parte del estado de dar educación a los menores.

Sr. Rodríguez (J. R.) — Y de mantenerlos.

Sr. Astrada. — Eso lo establecen las leyes de educación primaria de las provincias. De tal manera que la obligación de recibir el minimum de la instrucción y de darla por parte de los padres está legislada por las leyes de educación primaria de las provincias, y está encargada de velar por el cumplimiento de esas leyes la respectiva acción policial; de modo que en cualquier parte donde haya un niño en edad escolar que no reciba el minimum de la instrucción primaria que la ley fija, la policía tiene el derecho y el deber de hacer que los padres cumplan con esa disposición.

Pero a lo que yo me refiero es a esto, a una cosa distinta de la educación: ¿a dónde quiere el señor diputado que vayan esos niños que sobran, por decirlo así, en el hogar pobre, que parece que hasta por el hecho mismo de su pobreza es fecundo en exceso? ¿A dónde quiere que vaya ese porcentaje enorme de niños argentinos que no cabe ya en sus hogares pobres, cuando no puedan encontrar colocación adecuada a sus condiciones de edad y naturaleza física? El estado no los recoge, no los toma; una sociedad de beneficencia los toma en cierto estado, en la cuna, pero cuando esos niños llegan a cierta edad no cuentan ya con ese amparo; porque el señor diputado comprenderá que no puede costearse la subsistencia hasta la edad de diez y ocho o diez y nueve años, hasta que sean mayores de edad...

Varios señores diputados. — Hasta los catorce años.

Sr. Astrada. — Bien; hasta los catorce años. Pero después ¿a dónde quiere que vayan?

Sr. Verduga. — A las escuelas de artes y oficios.

Sr. Astrada. — Sobran en los hogares pobres, y los padres muchas veces enfermos, o muchos de ellos por falta de educación o capacidad moral, no les dan el sostenimiento ni la educación que a los niños les corresponde.

Sr. Anastasi. — No puede hacer el señor diputado ese argumento cuando esta misma cámara ha dictado una ley, la número 10.903, donde se considera como un caso de culpa por parte del padre, que justifica una sanción tan grave como la pérdida de la patria potestad, el solo hecho de que el menor de diez y ocho años se dedique a la venta de diarios.

Sr. Astrada. — ¿Pero qué sabe el padre? Es gente pobre y humilde. ¿Qué sabe del derecho que pierde, de la patria potestad? Además, no le interesa a él; lo que le interesa es la carga que importa para su sostenimiento el hijo, y, por consiguiente, cuando no puede alimentarlo, y cuando el estado no tiene una institución que lo recoja, ese niño sale a vagar por las calles y ese niño es un delincuente futuro.

Entonces, si la ley, con el propósito de amparar a la niñez, prohíbe a los menores acudir a una ocupación que no afecte a sus condiciones individuales, a su condición física, que no esté en desproporción, diremos, con su capacidad física, si les prohíbe el medio de ganarse la vida y de educarse y formarse, esa ley es una ley que contraviene, precisamente, los propósitos que ha tenido en vista.

Sr. Anastasi. — El argumento del señor diputado pertenece a la categoría del formulado por el señor diputado por Santa Fe. Son exactamente los mismos argumentos que se han hecho en todos los países en favor del trabajo de los menores de catorce años; y son argumentos que la sociedad moderna desestima.

Sr. Astrada. — Eso se refiere al caso de los talleres, de las fábricas, en que se exige un exceso de energía físi-

ca de que el niño no dispone, donde se hace una explotación en perjuicio del niño y en beneficio del comerciante o del industrial; pero no puede tener aplicación a este caso, en que se trata precisamente de la formación y educación del niño.

Sr. Anastasi. — Para eso está la excepción del artículo 3º., que expresa que la prohibición no rige respecto al trabajo de los niños con propósitos educativos en escuelas reconocidas al efecto por la autoridad respectiva.

Sr. Astrada. — Ese es otro caso. El propósito educativo no es el del servicio doméstico.

Sr. Anastasi. — Por lo mismo que no es un propósito educativo el servicio doméstico, lo prohíbe la ley.

Sr. Astrada. — Eso es confundir absolutamente los términos del artículo, y el señor diputado no discutiría en contra de mis argumentos si entendiésemos que en esa cláusula a que se refiere está incluido eso.

Sr. Anastasi. — ¿Cómo dice el señor diputado?

Sr. Astrada. — Que el señor diputado no argumentaría en contra de las razones que expongo si entendiésemos que está comprendido eso en las cláusulas del artículo 3º.

Sr. Anastasi. — Lo que yo entiendo es que esos menores deben ir hasta los catorce años a escuelas reconocidas por la autoridad competente.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — ¿Ha terminado el señor diputado?

Sr. Astrada. — Sí, señor.

Sr. Cardarelli. — Pido la palabra.

Esta ley de protección, señor presidente, se va a volver en contra de los menores a quienes quiere favorecer. Los menores de catorce años que no tienen refugio, porque el estado no se lo ofrece, que no tengan familias, que no tienen cómoda habitación, sépanlo los señores diputados que presentan leyes de mejoramiento del conventillo y del rancho, y que necesariamente tienen que trabajar para ganarse el sustento, van a ser condenados a la vagancia, inevitablemente a la vagancia.

El servicio doméstico no es un trabajo, como lo hace notar el señor diputa-

do, sino que es un refugio cómodo y de educación para los niños mismos.

Sr. Bard. — No siempre, señor diputado.

Sr. Cardarelli. — No les ofrecen sino perspectivas favorables a esos niños, que en esos hogares pueden aprender buenas normas de conducta, y voy a demostrar que esta ley se va a volver en contra de los que pretende proteger.

Si ella se sanciona tal cual se la presenta no habrá fábrica que ocupe mujer casada para sus tareas, porque indiscutiblemente estará obligada a privarse de los servicios de las mismas durante doce o más semanas, y si a esto agregamos que hay que conservarles el puesto, se van a cerrar las fábricas para las mujeres, con lo que se les va a obligar a morir de hambre porque no existe la protección o asistencia del estado, de gran asistencia social, que auxilie a las mujeres por razón de maternidad y se les prohibirá ganarse el sustento, con perjuicio para su propio hijo y para sí mismas.

Es muy linda toda esta ley, pero presupone una organización perfecta, y hablar del auxilio del estado entre nosotros, a estas horas, me parece que es impropio.

Ayer, un señor diputado ha tenido que presentar cinco proyectos de ley para hacer viable la ley penal que hemos sancionado recientemente, y para esos proyectos no se presentarán las dificultades que para esta otra ley, porque los otros se refieren a simples leyes que no afectan el fondo económico, requiriendo erogaciones mayores por parte del estado, pero ésta, en cambio, necesita un erario rico y poderoso capaz de llegar a auxiliar todas las necesidades y todas las miserias, pues de otro modo vamos a legislar en el aire, o de modo contraproducente.

Y contestando en forma fina pero de intención manifiesta, los señores miembros de la comisión nos han hecho retroceder a épocas antiguas a la de la esclavitud; diré que en cada caso una razón es razón y no sé si tuvieron razón en esa oportunidad los que aboga-

ron por la continuación de la esclavitud; no he pertenecido a ellos ni hubiera pertenecido, seguramente, pero hay que hacer que estas leyes sean protectoras y no ataquen a los mismos a quienes quiere proteger.

Ahí tenemos, sin ir más lejos, una empresa, la Unión Telefónica, que no empleaba mujeres casadas para sus servicios. Cuando una empleada se casaba la despedían.

Sr. Bard. — Ha sido modificado el reglamento interno, señor diputado.

Sr. Cardarelli. — Voy a insistir, sin embargo, y sostengo que este segundo apartado debe votarse sin incluir el servicio doméstico, beneficiando así a las mismas criaturas que van a hacer su aprendizaje y enseñanza en hogares buenos, al lado de señoras capaces de enseñarlas y dirigir las por la senda del bien, librándolas de los peligros reales de la vagancia que la ley hará inevitable.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

El señor diputado Cardarelli parece inspirarse en un ideal social que me extraña sobremanera. El ideal social del señor diputado parece que sería que todas las mujeres obreras casadas debieran abandonar a diario su hogar e hijos para ganar un salario con el trabajo industrial, y que los niños menores de catorce años deberían, o bien enseñarse como pequeños esclavos en casas de familias que no tienen recursos para pagarse una buena auxiliar doméstica pero quieren tener las comodidades que esa buena auxiliar les proporcionaría, o bien, en cualquier otra forma de trabajo industrial o comercial.

No ha sido ese por cierto el criterio de la comisión. Nuestro propósito no es fomentar la explotación inícu y odiosa del trabajo infantil y de la mujer.

Sr. Cardarelli. — No es mi propósito tampoco.

Sr. Bunge. — No podemos aceptar como argumento el de la miseria en que quedarán los niños impedidos de ganarse un salario en edad en que ca-

recen de fuerzas para ganarlo, ni nos emocionan las madres que quedarán impedidas de trabajar, cuando el trabajo de ellas puede significar la muerte del hijo recién nacido. Nos preocupa el interés social general, y tenemos en vista la obligación del estado de atender a todas las mujeres y niños que forman parte de la colectividad.

No se puede tener presente ese aspecto tan pequeño y tan subalterno de la cuestión que ha sido presentado ahora, deben tenerse presentes los grandes intereses permanentes de la sociabilidad argentina, y ellos imponen prohibir el trabajo infantil, que es una forma subsistente de la vieja esclavitud.

Sr. Culaciati. — Pido la palabra.

Voy a proponer otra modificación al artículo.

No me explico la parte final del artículo que consagra una excepción. Si realmente la ley se ha concebido para proteger al niño, no veo por qué se ha de prohibir el trabajo en general, cuando se trata de un menor de 14 años, y se ha de permitir cuando esté acompañado por el padre, un hermano u otro miembro de la familia.

Sr. Anastasi. — ¿El señor diputado propone la supresión de la última parte del artículo?

Sr. Culaciati. — De la última parte que se refiere a la excepción, o por lo menos, que se den las razones en que esa excepción se funda.

Sr. Anastasi. — La comisión ha mantenido esta excepción porque figura en las últimas convenciones internacionales del trabajo. Ha parecido, en este período de evolución de la legislación del trabajo, conveniente detenerse ante la propia familia del empleador, es decir, permitir que el taller atendido exclusivamente por la familia o que la pequeña casa de comercio atendida exclusivamente por la familia pueda escapar a esta reglamentación estricta. Se entiende que en cualquier caso el padre va a ser un patrón más humano que el empresario o el industrial extraño a la familia del menor.

Sr. Culaciati. — No resulta así el artículo de la comisión.

Sr. Anastasi. — Pero si el señor diputado desca la supresión, tiene el camino de proponer que se vote por partes, y la comisión, entre tanto, en una brevísima deliberación, resolverá si acepta o no la supresión.

Sr. Culaciati. — Yo pedía las razones de la excepción, y como las que se han dado no me satisfacen...

Sr. Anastasi. — He consultado con algunos miembros de la comisión y no aceptan la supresión; de manera que la comisión mantiene su despacho.

Sr. Culaciati. — Entonces, debe redactarse en una forma más clara, porque no se comprende realmente el alcance del artículo, en la forma que acaba de explicarlo el señor diputado, porque se habla en términos generales, para toda clase de establecimientos y para todas las casas en que el menor trabajo acompañado por un miembro de la familia; no se refiere al caso en que él trabaje en un establecimiento industrial perteneciente a su familia. De manera que habría que aclarar.

Sr. Anastasi. — Si el señor diputado desea proponer una forma de redacción...

Sr. Culaciati. — Yo quiero que la comisión redacte el artículo en forma clara.

Sr. Bunge. — La comisión considera que el artículo traduce en forma clara su pensamiento. Trate el señor diputado de redactar con claridad su pensamiento y entonces la comisión...

Sr. Anastasi. — Yo comprendo las dudas que asaltan al señor diputado.

El teme que por esta excepción se cuelen excepciones no previstas por la comisión. En realidad, la comisión entiende que este artículo se refiere, como excepción, exclusivamente a aquellos casos en que trabajan los miembros de la familia del empleador, única y solamente los miembros de la familia del empleador, y ha tomado este texto, sin variante, porque es el texto es-

pañol de las convenciones de Wáshington y Ginebra.

Paréceme que con esta explicación, con el pedido del señor diputado, y con la respuesta de la comisión, que vale como interpretación auténtica de la ley, se podría conservar la misma forma, entendiéndose que se refiere exclusivamente a los casos en que trabajan sólo los miembros de la familia del empleador.

Sr. Culaciati. — ¿La industria doméstica?

Sr. Anastasi. — Y las pequeñas casas de comercio donde trabajan el papá, la mamá y los chicos.

Comprendo muy bien las observaciones...

Sr. Culaciati. — La comisión comprende que es necesario aclarar el artículo, pero no lo aclara.

Sr. Anastasi. — Está bastante aclarado.

Sr. Bard. — No estará aclarado para el señor diputado.

Sr. Anastasi. — La comisión conserva esa excepción en los mismos términos en que se ha conservado en las convenciones internacionales, y se ha entendido en todas ellas que la excepción es en el caso en que trabajan los menores de la familia del empleador. Ahora si se quiere agregar "a excepción de aquellos casos en que sólo trabajan los miembros de la familia del empleador" no habría inconveniente.

Sr. Culaciati. — Sería conveniente, en obsequio a la claridad del artículo.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Anastasi. — Ya está aclarado. El señor diputado no ha propuesta nada.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar.

—Se vota y aprueba el artículo 2.º.

Sr. Bunge. — Podrían darse por aprobados por la presidencia los artículos que no sean observados. En esa forma tendría ocasión cualquier señor diputado de formular con tiempo sus observaciones.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — La presidencia ha tenido presente la

indicación del señor diputado, pero no ha tenido oportunidad de ponerla en práctica porque hasta ahora todos los artículos han sido observados.

—En discusión el artículo 3.º.

Sr. Dickmann (E.) — Agradecería que la comisión me explicara el espíritu de este artículo, que es para mí algo obscuro. No concibo qué trabajos pueden realizar los niños con propósitos educativos.

Sr. Anastasi. — El de las escuelas profesionales, por ejemplo, cuyos propósitos educativos son controlados por el estado, porque para eso se requerirá la intervención de la autoridad escolar competente. Para las escuelas sostenidas por una sociedad con propósitos de lucro, va de suyo que el artículo no regiría. Se trata de completar aquellos propósitos que tenía en vista el señor diputado por Córdoba, que se alarmaba por la suerte de aquellos niños menores de catorce años que no tienen trabajo y que no lo pueden obtener ni en el servicio doméstico ni en las industrias. Pues bien: ellos tienen la escuela profesional organizada y tutelada por el estado.

Sr. Dickmann (E.) — Pido la palabra.

Al pedir la aclaración comprendía que en realidad no había nada que prescribir para las escuelas profesionales del estado, porque son fundadas con propósitos educativos, sino para otras escuelas privadas donde se hace trabajar a los niños.

Desearía se aclarara esta mi duda, porque para la interpretación de las leyes los encargados de hacerla se guían por la letra y el espíritu del debate que animaba a la cámara en el momento de su sanción. Desearía que la comisión me dijera que el artículo no se refiere a aquellos establecimientos que fabrican para la venta, porque en tal caso el trabajo de los niños serviría para hacer competencia a la industria, trabajando en condiciones inferiores a las de aquellos que están sometidos a las leyes generales que dicta el congreso. En tal caso quedaría aclarado que esta

ley no se refiere a ningún establecimiento que hace trabajar a sus alumnos, para que no pueda hacer competencia a la industria en general.

Sr. Anastasi. — La comisión se complace en acceder al pedido del señor diputado; y como las opiniones del miembro informante pesan en la interpretación de la ley, la comisión declara que este artículo no se refiere en manera alguna al trabajo realizado en las escuelas sostenidas por sociedades, de cualquier naturaleza que sean, que realicen propósitos de lucro o que hagan competencia al comercio o a la industria. El artículo se refiere exclusivamente a las escuelas profesionales donde brilla por su ausencia el propósito de lucro.

Sr. Catalán. — Propósitos exclusivamente educativos.

—Se vota y aprueba el artículo 3.º.

—En discusión el artículo 4.º.

Sr. Quinteros. — Pido la palabra.

Propongo que en este artículo se substituya la palabra "efectivo" por la palabra "ejerza".

Sr. Anastasi. — La comisión acepta.

Sr. Amuchástegui. — ¿La mujer casada puede ejercer esas profesiones?

Sr. Anastasi. — Donde la ley dice "mujer soltera" no se puede leer "mujer casada".

Sr. Amuchástegui. — No sé por qué motivo se limita el beneficio de la ley a la mujer soltera. Debe ser igualmente protegida la mujer casada, a quien el marido le ordena el ejercicio de profesiones en las calles o sitios públicos. Y quiero saber cuál es el espíritu de la comisión al respecto.

Sr. Anastasi. — El texto es claro: la comisión sólo ha tenido en mira al varón menor de 14 años y a la menor soltera hasta 18 años. Cuando la ley es clara, no cabe la interpretación.

Sr. Amuchástegui. — Ya sé que es eso lo que dice la ley, lo que me interesa es saber qué motivo ha tenido en cuenta la comisión para excluir a la mujer casada. Y como no sé qué motivos puedan justificar esta exclusión,

propongo que se haga extensiva a toda mujer casada o soltera.

He visto cuadros muy dolorosos, esposas mandadas por los hombres — no sé si tienen derecho a llamarse así — a ejercer profesiones en las calles y lugares públicos, a ejercer hasta la mendicidad...

Sr. Rodeyro. — Eso no es profesión.

Sr. Anastasi. — Este artículo se refiere a la legislación del trabajo, a la legislación del trabajo lícito y honesto. La comisión no ha entrado a legislar ninguna actividad ilícita o deshonestista de la mujer.

Sr. Amuchástegui. — Sigo preguntándole: ¿por qué nos limitaremos a proteger a la mujer soltera, estableciendo que no podrá ejercer ninguna profesión en las calles, plazas o sitios públicos, y por qué ha de permitirse a la mujer casada lo mismo? ¿Qué diferencia entre la mujer casada y la mujer soltera puede justificar este distinto criterio?

Termino esta exposición que, repito, es improvisada, proponiendo que se haga extensivo a la mujer casada el beneficio que éstas prohibiciones representan para la mujer soltera.

Sr. Cafferata. — Para la mujer soltera menor de diez y ocho años.

Sr. Amuchástegui. — La ley debe proteger igualmente a la mujer casada de menos de 18 años.

Sr. Anastasi. — La comisión mantiene su despacho, sin perjuicio de que el señor diputado proponga que se vote por partes...

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — ¿El señor diputado por la capital propone algún agregado?

Sr. Amuchástegui. — Propongo que ningún varón menor de catorce años, ni mujer menor de 18, pueda ejercer por cuenta propia o ajena profesión alguna que se efectúe en calles o plazas públicas. O simplemente que se quite del despacho la palabra "soltera".

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — La comisión no acepta la modificación propuesta.

Sr. Muzio. — Pido la palabra.

Habiendo una buena cantidad de abogados en esta cámara, desearía saber

si una mujer puede casarse antes de los diez y ocho años, porque si fuera así, sería lógico que se incluyera también a las mujeres casadas.

No recuerdo si el código civil o la ley de matrimonio — lo podrían decir los abogados — permite casarse a las mujeres menores de diez y ocho años. El propósito que persigue la ley es reglamentar el trabajo lícito de la mujer en sitios públicos, comercio o industrias privada, sea casada o soltera; de ahí la conveniencia de prescribirlo claramente en todos los casos, a fin de impedir la violación de los fines sociales y morales perseguidos por la ley.

Sr. Cardarelli. — La mujer puede casarse a los 12 años y el hombre a los 14.

Sr. Muzio. — Entonces, cabe la frase, de "soltera" o "casada".

Sr. Anastasi. — La comisión vuelve a repetir que mantiene su despacho.

Sr. Amuchástegui. — Quiero observar esto: que el único artículo que dice mujer soltera es éste; en todos los demás dice mujeres en general, lo que significa que el propósito de la ley es proteger a todas las mujeres.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar el artículo 4°.

—Se vota y es aprobado.

—En discusión el artículo 5°.

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra.

Me he abstenido de formular objeciones de detalle a la ley que estamos discutiendo. En cambio, la única proposición que voy a formular en el curso de este debate reviste, a mi juicio, importancia excepcional.

Esta ley de protección del trabajo de las mujeres y de los niños que estamos discutiendo no tiene ninguna disposición relativa al horario. Me parece una laguna evidente. Ya que se reglamenta la edad, especialmente por razones de salud y de higiene, el horario tiene, en tal caso, mayor importancia; es a mi juicio lo fundamental cuando se trata de trabajo en general y el de mujeres y niños, especialmente.

Dado que recién ayer se planteó este asunto, no he tenido tiempo de traer nuevos datos, pero puedo referirme a los que he citado en la legislatura de Buenos Aires, en 1914, cuando se discutió una ley semejante. Creo que serán más o menos las que rigen en la actualidad, porque durante la guerra pocas modificaciones de fondo se han introducido en estas leyes.

Pero, antes de citar las legislaciones extranjeras, quiero decir algunas palabras sobre la forma cómo se procede entre nosotros respecto de esta clase de leyes.

Cuando se tiene la seguridad de que la ley no va a ser sancionada, las proposiciones son de una generosidad y de una amplitud extraordinarias. Cuando se trata de proponer en la certidumbre de que la ley ha de pasar, entonces la generosidad se frena. Lo hemos visto en el debate de esta tarde.

En la legislatura de Buenos Aires he citado algunos datos muy interesantes respecto a proposiciones sobre horario de menores en nuestro país. En el proyecto de patronato de la infancia, presentado al senado nacional en el año 1892, se establecía el trabajo de seis horas para los niños. En 1894, en el despacho de la comisión de legislación del senado, se aceptó la prescripción. En 1892 se consignaba igual precepto en el proyecto del doctor. Obligado Posteriormente, en el artículo 31 del proyecto de Williams, y en 1902 en el artículo 2.º del segundo proyecto del patronato de la infancia, y en 1904 se consignó esta prescripción en el proyecto del famoso código del trabajo presentado por el doctor Joaquín V. González. Estos antecedentes demuestran que las proposiciones han sido frecuentes, pero no se ha legislado nada al respecto hasta ahora.

Pedí a la comisión su parecer sobre mi proposición, porque a ella se la formulé, pues conceptúo mucho mejor para la ordenación del debate que las proposiciones se formulen en la comisión y no en el recinto. Hace un momento, contestando al señor diputado Ortíz, que me indicaba que es mejor hacer las proposiciones en la comisión,

aun cuando no son tan teatrales como en el recinto, yo le hice precisamente esta referencia, porque no soy partidario de traer al debate asuntos en forma improvisada, pues generalmente no salen bien.

Hice la proposición en la comisión y me contestó que no había formado opinión al respecto. Creo que ahora estará lista para contestar si acepta o no.

La ley tendría una laguna formidable si no se estableciera horario máximo.

Se me dijo por alguien que ya la honorable cámara ha votado una ley que se encuentra detenida en el senado, que establece la jornada general de ocho horas. Pero, señores diputados, esto no es una objeción, en primer lugar porque en aquella ley no se establece la jornada de seis horas como en la proposición que formulo, y en segundo lugar no veo el inconveniente de la repetición. Ruego al señor secretario se sirva leer para mayor claridad del debate mi proposición.

—Se lee:

“No podrá ocuparse en la industria y comercio a mujeres mayores de diez y ocho años durante más de ocho horas diarias o cuarenta y ocho por semana, ni a menores de diez y ocho años durante más de seis horas diarias o treinta y seis horas por semana.”

Sr. Dickmann (A.) — En todo caso, la ley votada se referiría a las mujeres mayores de 18 años, pero en ninguna forma a los menores de 18 años, cuya jornada es restringida por todas las leyes del mundo. Por ejemplo, en Noruega los niños de 12 a 14 años tienen cinco horas diarias de trabajo; en Alemania, de 13 a 14 años, seis horas; en Dinamarca, de 12 años, seis horas; en España, de 10 a 14 años, seis horas diarias en los establecimientos industriales solamente; en Finlandia, de 12 a 15 años, siete horas; en Portugal, de 10 a 12 años, seis horas; en Bulgaria, de 10 a 12 años, seis horas; en la Gran Bretaña, de 12 a 14, treinta horas semanales; en Bélgica, de 12 años, seis horas; en Grecia, de 12 a 14 años, seis

horas; en Puerto Rico, de 12 años, seis horas diarias de trabajo. Respecto de este último país, entre los beneficios que ha recibido de la intervención americana, hay que contar el de la legislación del trabajo, que antes, como colonia española, no la tenía.

Algunas de las leyes mencionadas datan, como la inglesa, del año 1878, y la alemana, del año 1891.

No quiero, señor presidente, dada la altura del debate y el cansancio de la honorable cámara, insistir mayormente en la necesidad imperiosa de que esta ley salga completa al menos en lo fundamental, aun cuando pueda contener algunas pequeñas deficiencias en los detalles.

No sé si la comisión acepta mi proposición; si así fuera, pongo ahora punto final a mi exposición; de lo contrario me reservo el derecho de contestar a los argumentos que se den en contra.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

La comisión al considerar el primitivo despacho no había incluido disposición alguna relativa a la jornada de las mujeres, porque entendía que el proyecto sancionado por esta honorable cámara el año pasado regiría bien pronto el caso cuando el honorable senado lo convirtiese en ley. Como ese ha sido exclusivamente el motivo que ha tenido la comisión para no consagrar una limitación de la jornada para las mujeres, como ha querido casi, diríamos, afirmar su deseo de que esta limitación de la jornada comprenda a varones y mujeres bien pronto, no hay inconveniente — como lo ha resuelto la comisión, a la cual el señor diputado hizo llegar su requerimiento — en aceptar el agregado que propone.

Sr. Cafferata. — Pido la palabra.

Como el señor diputado Dickmann ha citado algunas legislaciones extranjeras en apoyo de su propósito, con el cual estoy de acuerdo, debo hacer notar a la honorable cámara que en la ley dictada en la provincia de Córdoba, durante el gobierno del doctor Núñez, se encuentra precisamente la disposición a que el señor diputado hace referencia, sobre todo en lo que se refiere a la jornada de ocho horas...

Sr. Dickmann (A.) — No he citado esos antecedentes, porque, como dije, me remitía a los que había dado en el año 1914.

Sr. Cafferata. — El artículo 10 establece que el trabajo de las mujeres y de los menores de 16 años no podrá durar más de ocho horas diarias, ni más de cuarenta y ocho horas por semana.

El señor diputado propone una jornada de seis horas para los menores, que la comisión acepta muy complacida.

Sr. Dickmann (A.) — Yo creo que el agregado aceptado por la comisión quedaría mejor como encabezamiento del artículo 5°, porque precisamente se trata de una disposición genérica y las otras también son excepciones.

Sr. Anastasi. — Podría ir como artículo aparte, como artículo 5°.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por la capital, doctor Dickmann, aceptado por la comisión como artículo 5°, quedando el 5° como 6°.

Se va a leer.

—Se lee nuevamente.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Sin observación se dan por aprobados los artículos 6°, 7° y 8° (antes 5°, 6° y 7°)

—En discusión el artículo 9° (antes 8°).

Sr. Bunge. — Forma parte del despacho de la comisión.

Sr. Anastasi. — Es una pequeña trasposición.

Sr. Maidana. — Yo iba a preguntar a la comisión si este riesgo que corren las mujeres de 18 años, es más peligroso que el que corren las mujeres de 50 años. Se podría proteger a la vejez.

Sr. Ortiz. — Es la industria misma que se encarga de jubilarlas por falta de rendimiento.

Sr. Maidana. — Yo creo que es tan digna de protección la mujer hasta los 18 años como la que pasa de los 50.

No hago ninguna proposición: es una simple observación.

—Se da por aprobado el artículo 9°.

—En discusión el 10.

—Se aprueba como artículo 10 el 9° del despacho de la comisión, y como artículo 11 el 10 del mismo despacho. Se aprueba, igualmente, el agregado propuesto por el señor diputado Bunge, y aceptado por la comisión, al inciso j) de este último artículo, en la siguiente forma: "destiladas o fermentadas, y en cualquier local o dependencia en que se expendan".

—En discusión el artículo 12 (11 del despacho de la comisión).

Sr. Texier. — Pido la palabra.

He escuchado, señor presidente, con singular atención las exposiciones que se han hecho referentes al asunto que estamos tratando, y uno de los puntos que principalmente me ha llamado la atención es aquel a que se ha referido el señor diputado miembro informante de la comisión doctor Bunge, quien no ha dado las explicaciones que yo hubiera deseado, pues decía que no se había creído necesario establecer que las mujeres a que se refiere el artículo 12 debían tener una retribución o un salario asignado por sus patrones. A pesar de eso, yo preguntaría si en este afán de sostener la protección a la mujer, se entiende que se la protege reservándole sólo su puesto de trabajo, precisamente en los momentos más difíciles en que está por dar a luz en el período que sigue. La protegeremos mejor y más eficazmente, no sólo conservándole ese puesto sino también ayudándola con disposiciones expresas que obliguen a su patrón, a los dueños de fábrica o talleres para que le pasen un subsidio o sus jornales, para que las alimenten y ayuden también en aquellos momentos, que si son los más dolorosos son los más gloriosos para una mujer que ha de ver trasuntado su espíritu y su carne en el ser que dará a luz.

No creo, señor presidente, que se lleve cumplidamente el propósito con sólo establecer que se protege a la mujer reservándole su lugar: es necesario ayudarla, y hago estas observaciones porque en nuestra provincia, como se lo manifestaba hoy al señor diputado doctor Bunge, en Entre Ríos, hemos tratado un proyecto de ley de protección a la mujer en el que se establecían cláusulas más o menos semejantes y algunas otras, de que me ocuparé cuando llegue el momento, y que tienden más a ayudar no sólo a la mujer en esos trances sino a la que se ha despojado de su trabajo, para auxiliarla en aquel momento de sacrificio.

Yo no veo que importe una mayor erogación ni un sacrificio para el patrón. A la mujer debe protegérsela en ese trance difícil que, si se quiere, es también una protección a la niñez.

Espero la palabra de la comisión.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Como he suscitado la cuestión al discutirse en general la ley, voy a contestar las observaciones del señor diputado.

Dije en esa oportunidad que el despacho de la comisión no establecía una obligación patronal de pagar el salario a las obreras impedidas de trabajar con motivo de su maternidad porque consideraba que en la práctica, esa obligación redundaría en perjuicio de las propias obreras; y creo interpretar el pensamiento de los demás colegas de la comisión al decir que consideramos complemento indispensable de la prohibición del trabajo de parturientas el seguro o dotación de maternidad. La diputación socialista ha presentado ha seis años, por mi intermedio, un proyecto de seguro social del cual forma parte el seguro de maternidad, el que beneficia precisamente a las mujeres que deben trabajar en el período del embarazo. Es en esa forma que debe encararse el asunto, porque la percepción de los fondos y la fiscalización de los pagos reclama una organización administrativa especial, y es un asunto delicado y complejo si se quiere algo real.

La ley que discutimos, no es una ley de asistencia social, de seguro social: es

simplemente una ley reglamentaria del trabajo de mujeres y niños. Por lo tanto, no puede entrar a establecer obligaciones del estado con respecto a las obreras parturientas. Eso es materia de otra ley.

No puede tampoco introducirse en esta ley una disposición incidental, poniendo a cargo del estado la indemnización de las parturientas, porque ello la complicaría con la comisión de presupuesto. Ni puede tampoco la comisión proponer, con motivo de esta ley especial, una ley general de seguro de maternidad. Sería complicar el mecanismo de esta ley sin necesidad alguna. En cambio, la comisión, que tiene muchos proyectos en su carpeta de seguro nacional, de seguros especiales, de dotación, no dudo que, en su oportunidad ha de presentar algún despacho en que se encare esta cuestión, porque ella es completamente indispensable, de la prohibición del trabajo de las parturientas.

En esta ley, créame el señor diputado, sería perjudicar a las propias presuntas beneficiadas el introducir una obligación patronal de pago de salarios, y es materialmente imposible, sin falsear completamente su mecanismo, introducir disposiciones de dotación de maternidad a cargo del estado.

Sr. Texier. — Pido la palabra.

No creo que esto acarrearía ningún peligro y no veo tampoco que en una ley de protección de la maternidad...

Sr. Bunge. — No es ésta la ley de protección de la maternidad.

Sr. Texier. — Me voy a guiar por el título que tiene el capítulo, qué no es tampoco una expresión, sino una concepto a realizarse dentro de su artículo.

En una ley de protección...

Sr. Bunge. — Ahí cabe muy bien.

Sr. Texier. — Se habla del caso hipotético de que se van a sancionar otras leyes; pero ya que estamos ahora tratando este proyecto, hagámosla lo más completo posible.

Ahora se exige la contribución patronal de un tanto por ciento de ayuda; mañana, cuando tengamos la ley completa de protección de la maternidad,

bien podrían ir esos fondos a reforzar el fondo común, el fondo colectivo para la ayuda; pero mientras tanto, démosle esa protección, que no es gravosa para un patrón, para un jefe de taller y que importa un beneficio, sin perjuicio de que mañana demos margen a que ese fondo se aumente.

Sr. Amuchástegui. — Ya se practica por muchos industriales del país.

Sr. Texier. — Si se practica ya, nada más justo que se incorpore a la ley, para que sea eficaz. Si se hace ahora es porque voluntariamente los patrones quieren prestar esa ayuda, y me parece conveniente que ofrezcamos esa seguridad, consignándola en la ley.

Nada más.

Sr. Rodríguez (J. R.) — Pido la palabra.

Sr. Cafferata. — Yo la había solicitado.

Son muy plausibles, señor presidente, los propósitos que animan al señor diputado por Entre Ríos, pero en apoyo de lo que acaba de manifestar el señor miembro informante de la comisión, señor diputado por la capital, voy a citar un antecedente que es muy interesante, porque se refiere a un país que está muy adelantado en materia de legislación: Suiza.

Entre las medidas destinadas a la protección de las madres en Suiza, el año 1877, se estableció la prohibición de trabajar ocho semanas, cuatro antes y cuatro después del parto, para las mujeres que se encontraban embarazadas, y sólo después de treinta y dos años, se consignó en la ley de seguros sociales.

La comisión de legislación del trabajo, como lo ha manifestado el señor diputado por la capital, ha querido dejar librado al estudio que hará sobre esta materia de seguros sociales el punto a que se ha referido el señor diputado, creyendo que en breve ha de despacharlo y que ha de contemplar esa situación muy digna de ser tenida en cuenta.

Por lo demás, existen también algunos antecedentes a favor de lo que acabo de manifestar, y a este respecto está la ley de la provincia de Córdoba, de

protección a las madres, que establece que el estado proveerá, hasta tanto se dicte una ley general, de un subsidio equivalente a la mitad del jornal.

La comisión, como digo, no ha encontrado oportuno incluir en este proyecto un artículo de esta clase. Si el señor diputado lo propone, la comisión discutirá si lo acepta o no.

Sr. Texier. — Pero ya la establecíamos, señor, en esta ley, y cuando venga la ley de fondo, la especial, se agregaría lo relativo a la contribución del 50 por ciento a cargo del estado, en virtud de lo que estaría ya estipulado por la ley que ahora discutimos, que ya estaría consagrado en ella.

Sr. Rodríguez (J. R.)—Comparto íntegramente el pensamiento del señor diputado por Entre Ríos al proponer a la cámara este nuevo artículo. Sería lamentable que se sancionara esta ley redactada con tan buenos propósitos y tan inteligentemente por la comisión de legislación del trabajo, si no se la completara, en lo que se refiere a la protección a las madres durante el período en que la ley considera indispensable alejarlas de su ocupación habitual, estableciendo que durante ese tiempo han de gozar, ya sea por la contribución de los patrones o por la contribución mixta de los patrones y del estado, que sería lo más justo, de todos o de una parte por lo menos de sus haberes ordinarios.

La observación que formula el señor diputado Bunge, de que esto sería materia a considerarse por la comisión de presupuesto en otra oportunidad, no tiene en realidad mucha consistencia. Si la comisión de presupuesto se encontrara con una cláusula de esta ley, no con una simple aspiración expresada en el debate, con una disposición concreta, que obligara al estado a abonar la totalidad o una parte de los jornales, se encontraría en el caso de proveer de fondos en el presupuesto anual de gastos para que la ley se cumpliera. Pero si al votarse esta ley por el congreso no se crea obligación alguna al estado en forma concreta e imperativa, la comisión de presupuesto, evidentemente, no va a destinar fondos para este objeto,

cuando el estado no tiene contraída ninguna obligación.

De tal manera que considero indispensable incluir en el texto de este despacho el artículo que propone el señor diputado por Entre Ríos. Si la comisión manifiesta su conformidad en lo que es fundamental, en la justicia de que sean abonados esos jornales durante el tiempo que por disposición de la ley se aleja a las madres del trabajo, no haría ninguna dificultad en que coincidiéramos todos en incorporar ese artículo a la ley y dejemos para la comisión de presupuesto la tarea de fijar oportunamente los recursos para cumplirlo. Entretanto, debemos crear en la ley la obligación del estado con una parte y la obligación del patrón de completar la suma que debe recibir la mujer alejada del trabajo en esas condiciones.

Sr. Dickmann (E). — Pido la palabra.

Aun cuando como lo supondrá el señor diputado por Entre Ríos, yo no me opongo a la necesidad de asegurar el sustento a la mujer, que por ley está obligada a abandonar el trabajo antes y después del parto, cabe, sin embargo, la discrepancia en la oportunidad de hacerlo, es decir, en cuanto a la conveniencia de introducirlo en este proyecto de ley. A mi entender no es oportuno introducirlo aquí, y tengo algún motivo para decirlo, porque soy autor de un proyecto de seguro de la maternidad presentado el año 1915 y reproducido una o dos veces. Quiere decir que me anima el espíritu de crear los fondos necesarios a la seguridad de las mujeres que tienen que descansar antes y después del parto y que no pueden trabajar. Pero, en mi opinión, la cámara improvisaría ahora un artículo que no conviene improvisar porque malograría el propósito de la ley. Si se acepta el criterio del señor diputado por Entre Ríos, que es en su espíritu plausible, y se obligara a los patrones a indemnizar a estas mujeres con un tanto por ciento de sus jornales, correríamos el riesgo, señores diputados, de

que los patrones, cuando sepan que tienen una obrera o una empleada encinta, la despidieran. Yo sé que hay algunos patrones animados del espíritu a que hacía referencia el señor diputado Amuchástegui; pero no son todos, más bien son la excepción. Por eso considero que si la ley obliga a todo patrón a indemnizar a la mujer seis semanas antes y seis semanas después del parto, los patrones se cuidarán muy bien de no tener ninguna mujer encinta y se perjudicará realmente a estas mujeres que se pretende proteger. Es un asunto complejo, difícil.

Tampoco podría correr el estado con todo lo que entra en la categoría del seguro social. En mi proyecto he establecido la triple contribución del patrón, de la mujer y del estado; pero del patrón para toda mujer que emplee, no para la mujer parturienta; y como el patrón tendrá que pagar por toda mujer empleada, no tendrá ningún interés en despedir a la que esté encinta.

Por eso me parece que el criterio de la comisión es perfectamente aceptable. Es una ley reglamentaria de una faz del trabajo y se establece el principio del descanso obligatorio para la mujer que está encinta. Otra ley establecerá el seguro social, total o parcial, tal como debe hacerse.

Por otra parte, señores diputados, debemos también comprender que estas leyes no se sancionan en un abrir y cerrar de ojos. Se dice que si no establecemos eso ahora perjudicaremos a la mujer. Este proyecto va a ir al senado, que es el enterratorio de todos los buenos proyectos. Así que podemos tener paciencia. Hasta que el senado se ocupe de este asunto, estoy seguro que la comisión de legislación del trabajo, que se ha estrenado con una plausible labor y cuyos miembros, estoy seguro, están animados de un propósito de trabajo, nos presentará dentro de poco un despacho sobre seguro de la maternidad, ley ya sancionada en muchos países. Entonces se legisla-

rá sobre este asunto con toda ciencia y conciencia. Ahora estamos improvisando. Y yo, autor de un proyecto de seguro de la maternidad, considero que con este agregado introduciríamos una perturbación al proyecto de ley en discusión.

Por lo tanto, me opongo al agregado propuesto por el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Catalán. — Pido la palabra.

Cuando en el seno de la comisión de legislación del trabajo llegamos a discutir ese artículo, nos asaltaba la duda de que no podíamos dar la base económica indispensable para hacer efectiva esta protección de la maternidad, que es hoy en todos los países una aspiración concretada en proyectos de ley, como en Francia, donde se ha presentado uno de los más completos, como en Alemania, que ya tiene una ley de protección de la maternidad; pero teniendo en cuenta el espíritu de nuestro despacho, que es de reglamentación del trabajo, y no de protección, la comisión pensó que accidentalmente convenía esto porque lo habíamos visto en la convención de Washington. Y en este sentido podemos decir que la República Argentina en este punto estará más adelantada, puesto que otras legislaciones establecen el abandono facultativo de las mujeres en el período anterior al parto, en tanto que nosotros lo hacemos con carácter imperativo, es decir, que deben abandonar el trabajo seis semanas antes de que se produzca el parto.

Como en el seno de la comisión existen numerosos proyectos, entre ellos el del señor diputado Dickmann, hemos creído conveniente, como acaba de decirlo el señor diputado Dickmann, que para que esta protección sea real, tal como la quiere el señor diputado por Entre Ríos y como es la aspiración de todos los señores diputados, debe ser materia de una ley de seguro social, teniendo como base la contribución del estado, del patrón y de los mismos obreros, porque es la única manera en

que se puede proteger a la madre en una situación que es realmente afligente si no se le suministran los recursos necesarios para que pueda dejar de trabajar seis semanas antes y seis semanas después del parto.

En este sentido, la comisión de legislación del trabajo, animada de los mejores deseos en aras de la salud pública y de previsión sociales, que es el programa más amplio que ha tenido el partido que en mi provincia levantó mi candidatura a diputado nacional, considero que ha de dar un despacho a la brevedad posible para satisfacer las aspiraciones del electorado y también para probar que dentro de nuestra legislación social nos preocupamos de la salud de la raza y de su conservación y también de las madres, que son las que mañana darán los hijos para servir a la patria en todos sus aspectos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Saccone. — Pido la palabra.

Me voy a permitir formular una pregunta a la comisión.

Dice en su última parte el artículo 11: "Deberá conservárseles — habla de las parturientas — el puesto durante el período en que permanezcan ausentes en virtud de las disposiciones anteriores." Y esto se ha reproducido en el artículo 12 al decir: "En caso de que una mujer permanezca ausente de su trabajo durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad que según certificado médico deba su origen al embarazo o al parto y la incapacite para reanudarlo, no se podrá declararla cesante con ese motivo."

Me permito preguntar a la comisión qué sanción establece el despacho para el caso de que el patrón deje cesante a la parturienta.

Sr. Bard. — Disposiciones penales, señor diputado.

Sr. Saccone. — No existen. Entre las disposiciones penales se aclara un concepto: "Se contarán tantas infracciones como personas ocupadas ilegalmente." De manera que se considera infracción la ocupación ilegal.

No estableciéndose sanción especial caeríamos en la sanción que contiene el código de comercio, que considera como empleada a la parturienta y le concede un mes de sueldo. Es una cuestión práctica, señor diputado.

Sr. Anastasi. — Nos estamos anticipando al capítulo de las disposiciones penales, donde sin duda alguna el señor diputado podrá proponer una aclaración que mejores la ley.

Sr. Saccone. — Con ese propósito preguntaba ahora.

Sr. Anastasi. — El señor diputado podrá proponer una modificación al texto del artículo 19.

Debo anticipar que la comisión ha entendido lo siguiente: ha querido afirmar el principio de que la resolución del contrato de trabajo no puede producirse en virtud del reposo de la mujer, obligatoriamente impuesto por la ley.

Ha pensado también que las disposiciones penales de este artículo 5º. alcanzarían a comprender esta inobservancia del patrón; pero puede estar plenamente convencida la honorable cámara de que si este propósito de la comisión no se ha traducido fielmente en el articulado de las disposiciones penales, va a apoyar toda iniciativa del señor diputado o va a proponer alguna iniciativa propia para mejorar estas disposiciones penales.

Aparte de esta consideración que acaba de formular el señor diputado por Santa Fe doctor Saccone, voy a recordar a la cámara una circunstancia que no se ha puesto de manifiesto por mis distinguidos compañeros de comisión. Este artículo 11 es reproducción casi textual de la disposición pertinente de la convención de Washington, pero mejorada. Mejorada en el sentido de que se ha prescripto la obligatoriedad del período de reposo anterior al alumbramiento, conforme en ese sentido con una disposición de la ley de Córdoba, conforme con el proyecto de código de trabajo de Chile, y conforme con algunos antecedentes legislativos argentinos, como el proyecto del señor dipu-

tado Dickmann y si no recuerdo mal el proyecto del señor diputado Araya.

Cuando la comisión que presidía con tanto celo el doctor Rodríguez presentó este despacho el año pasado, yo fui el primero en acercarme al doctor Rodríguez y decirle: ¿cómo es posible que la comisión haya incurrido en una omisión tan importante como es la de proveer a la remuneración de la mujer durante este período de reposo impuesto por la ley? Cómo es posible que la ley sea burlada por la fuerza de la necesidad? Y el doctor Rodríguez me mostró la orden del día número 202 en la página 20.048 — me refiero a las órdenes del día del año pasado — en que el capítulo tercero del proyecto de bases para el seguro nacional se refiere a las pensiones o subsidios de maternidad. Quiere decir entonces que una simple razón de ordenamiento legal ha determinado a la comisión a que aparte cuidadosamente lo que se refiere al subsidio de maternidad, que será materia de otro despacho — que sin duda alguna — considerará la cámara antes de que el senado haya considerado esta sanción.

En lo que se refiere a la contribución patronal adivino los plausibles propósitos de los señores diputados por Entre Ríos y Santa Fe, y no tengo más que hacerles una referencia de orden personal. Cuando en 1919 se discutía en la conferencia de Washington este punto, formaban parte de la conferencia delegados patronales y obreros; no hubo un solo delegado obrero que propusiera la contribución patronal. ¿Por qué? Por las razones que han dado los señores diputados Bunge y Dickmann: porque sería la manera de malograr los plausibles propósitos de la ley. Ocurriría más o menos como con aquella ilusión generosa de un legislador que proyectaba un salario mayor para el obrero casado en proporción al número de sus hijos: inmediatamente se objetó que el patrón preferiría al obrero soltero. Ocurriría aquí lo que apuntó el señor diputado Dickmann, por razones que todos comprendemos: el patrón despediría inmediatamente a la mujer que es-

tuviese en trance de alumbramiento próximo.

Decía que en Washington se llegó a la solución estableciendo este sistema: el estado respectivo determinará si estos subsidios se atienden con fondos públicos, con recursos de presupuesto o con contribuciones de un seguro para la maternidad. La comisión, por ahora, sabiendo que el poder ejecutivo ha aprobado ya ese proyecto de convención y que hay un despacho de la comisión de negocios extranjeros del año pasado, que sin duda alguna será reproducido, ha elegido entre los dos sistemas, entre la contribución en el presupuesto — sistema un poco aleatorio, precario, subordinado a las dificultades del erario — y el sistema de seguro combinado sobre base científica, el segundo sistema, al cual será materia de un despacho próximo. Por eso, vivamente complacido con los propósitos altruistas y humanitarios que inspiran a los señores diputados que han propuesto el agregado, les rogaría que no insistieran, en la seguridad de que la comisión ha de traer pronto la manera de satisfacer sus anhelos. Ya la comisión tiene estadísticas pedidas a las distintas reparticiones nacionales y municipales a fin de saber, por ejemplo, el número de mujeres obreras para poder determinar el índice de nupcialidad en la familia obrera, y todo este conjunto de estudios que tiene la comisión podrá permitir que una sanción de la honorable cámara no se tache de improvisada.

Nada más.

Sr. Texier. — Pido la palabra.

En vista de lo que acaba de manifestar el señor presidente de la comisión, no tengo inconveniente en retirar mi proposición, siempre en la seguridad y con la confianza de que la comisión habrá de expedirse en el sentido indicado, y con la seguridad de que el proyecto a que ha hecho referencia el señor diputado Dickmann habrá de establecer que la mujer que esté en cinta no podrá ser despedida.

Si todas esas fallas se salvan y hay una mayor tranquilidad en esa forma, me inclino.

Sr. Bunge. — El proyecto socialista de seguro nacional, que comprende el del señor diputado Dickmann, establece claramente esas disposiciones que hacen que no haya interés en los patrones en despedir a las embarazadas, porque no ganan nada con ello.

Sr. Parry. — Pido la palabra.

De las palabras pronunciadas por el miembro informante resulta que la comisión está dispuesta a escuchar la observación del señor diputado por Santa Fe, tendiente a modificar las disposiciones penales, haciendo una especial para el caso de infracción a los artículos 13 y 14 que se refieren a la conservación del puesto para la obrera pariturienta.

Sr. Bunge. — En el momento oportuno, tal vez se vea que no haya necesidad.

Sr. Parry. — Voy a leer un artículo que contemplará la necesidad de fijar una suma como multa, pero en favor de la mujer.

Sr. Saccone. — Esa no es una disposición penal. Es oportuna ahora. Yo quiero una sanción comercial en dinero, en favor de la mujer.

Sr. Anastasi. — No habrá inconveniente, en el momento oportuno...

Sr. Parry. — Voy a leer el artículo que iba a proponer a la consideración de la cámara en los siguientes términos: "El patrón que infrinja lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la presente ley, declarando cesante a una obrera, será reprimido con multa de 200 a 2.000 pesos, multa cuyo importe será en beneficio de la damnificada".

Sr. Catalán. — Lo tendremos en cuenta en su oportunidad.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — ¿Tendría inconveniente el señor diputado en deferir sus palabras para cuando sea oportuno?

Sr. Parry. — No, señor presidente; he hecho la proposición para que se la considere en el momento oportuno.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — Se va a votar.

—Después de unos momentos de espera:

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). — No hay número en la casa. Invito a los señores diputados a levantar la sesión.

—Se levanta la sesión siendo la hora 20 y 15.